


**RADICACION 2018-21 . CONTESTACION DE DEMANDA/ DTE: ISABEL PARDO TROCHEZ.  
/DDO: COOMOEPAL Y OTROS**

Adriana Patricia Cardoso Davila <adriana\_cardosodavila@hotmail.com>

Mar 12/07/2022 8:25 AM

Para: Juzgado 28 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j28cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 4 archivos adjuntos (4 MB)

PODER Dra Adriana Cardoso.pdf; Contestacion y anexos.pdf; Llamamiento y anexos.pdf; Certificado abogado.pdf;

Señores

**JUZGADO VEINTIOCHO (28) CIVIL MUNICIPAL DE CALI**

E. S. D.

**DEMANDANTE: ISABEL PARDO TROCHEZ**  
**DEMANDADO: COOMOEPAL Y OTROS.**  
**RADICACIÓN: 2018-00021-00**

**ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA**, en mi calidad de apoderada judicial de Cooperativa Especializada de Transportes Coomoepal, demandada dentro del proceso en asunto, de conformidad con lo preceptuado en el Decreto 806 de 2020, en el Acuerdo PCSJA-11581 del 27 de junio de 2020, Ley 2213 de junio 13 de 2020 y demás normas concordantes, dentro del término de Ley, radico por este medio los siguientes documentos:

- 1) Poder para actuar
- 2) contestación de la demanda y sus anexos
- 3) Llamamiento en Garantía con anexos
- 4) Certificación de abogado de la apoderada del demandado

En correo siguiente, se envía respuesta a derecho de petición remitido por el Ministerio de Salud, negando la prueba solicitada.

Agradezco confirmar la recepción de los documentos.

**FAVOR CONFIRMAR RECIBIDO**

Cordialmente,

**ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA**  
**ASESORIAS JURIDICAS APCD SAS**

**CARRERA 108 No. 42-92 Apto 603 torre 3**

**CELULAR 3166905529**

**CALI COLOMBIA**



ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

Señores

JUZGADO VEINTIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE CALI

E. S. D.

REF.	PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
RADICACION	No. 76-001-40-03-028-2018-00021-00
DEMANDANTE	ISABEL PARDO TROCHEZ
DEMANDADO	COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTES COOMOEPAL Y OTROS

**ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA**, mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.834.931 de Cali, abogada en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional No. 84.379 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en el presente proceso en calidad de apoderada judicial de la Cooperativa Especializada de Transportes COOMOEPAL, persona jurídica identificada con el Nit No. 890303081-7, registrada en la cámara de comercio de la ciudad de Cali, bajo el número de matrícula mercantil, con domicilio principal en la calle 5 No. 61-89 local 8 de la ciudad de Cali, y representada legalmente por la señora Johana Álzate Cardona, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.483.732 (representante legal suplente), según poder conferido que se aporta a este escrito, con el debido respeto me dirijo usted, para manifestarle que dentro del término legal estoy descorriendo el traslado y contestando LA DEMANDA VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL presentada a través de apoderado judicial por ISABEL PARDO TROCHEZ, lo cual procedo a hacer en los siguientes términos, en los cuales también presento excepciones de ley:

### **FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA**

**Al Hecho Primero:** A mi representada no le consta este hecho, y por lo tanto debe ser demostrado de manera fehaciente por el abogado actor de conformidad con la carga probatoria que le asiste.

No obstante lo anterior, es importante traer a colación que frente al contrato de transporte, el artículo 993 del Código de Comercio, consagra un régimen especial de prescripción y caducidad de la las acciones legales que proceden, tal y como se puede vislumbrar en las siguientes normas:

**"Art. 993. Prescripción de acciones.** Modificado. Decreto 01 de 1990, Art. 11. Las acciones directas o indirectas provenientes del contrato de transporte prescriben en dos años.

*El término de prescripción correrá desde el día en que haya concluido o debido concluir la obligación de conducción.*

*Este término no puede ser modificado por las partes"*

De conformidad con la mencionada norma, y como quiera que lo que se demanda es una responsabilidad generada de un contrato de transporte,



ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

---

debe decirse que las acciones que tenía la demandante para el cobro de sus supuestos perjuicios en contra de mi representada, prescribieron el día 10 de febrero del año 2012, toda vez que según el acápite de los hechos, este ocurrió el día 10 de febrero de 2010, pero al revisar las piezas procesales que conforman el sumario, se evidencia que la demanda fue presentada el día 16 de enero de 2016, es decir 8 años después de la ocurrencia del hecho, y 6 años después de que operara el fenómeno de la prescripción de las acciones derivadas del contrato de transporte.

Se aúna a lo anterior, que para la Cooperativa Especializada de Motoristas y Transportadores COOMOEPAL, la presentación de la demanda no interrumpió el termino Prescriptivo, esto en atención a lo reglado en el artículo 94 del C G del P. que a la letra reza:

**ARTÍCULO 94. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD Y CONSTITUCIÓN EN MORA.** *La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado.*

Así las cosas, tanto el fenómeno de la Caducidad como el de la Prescripción siguieron operando en favor de mi representada en este caso, en razón a que tan solo en el año 2022, se esta notificando del auto admisorio de la demanda, lo que significa que para mi representada transcurrió el termino de 12 años desde la ocurrencia del hecho, tiempo mas que suficiente para que el despacho se pronuncie de manera oficiosa con la Caducidad de la acción y de manera rogada frente a la Prescripción de la Acción.

De acuerdo a lo mencionado, nos atenemos a lo que resulte probado en el proceso.

**Al Hecho Segundo:** No le consta a mi representada si la demandante sufrió o no lesiones en el hecho de transito mencionado, por lo cual se exige que deberá probar de manera fehaciente este hecho.

En igual sentido deberá probar lo referente a que en el hecho, hubo el actuar imprudente del demandado Alberto Ruiz Delgado.

**Al Hecho Tercero:** Es cierto que el agente de tránsito Cesar A Franco fue quien realizo el informe policial de accidente de tránsito, sin embargo, no es cierto que se identifique con la placa 069 de la Secretaria de Transito, pues el mencionado informe dice otra cosa.



ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

---

De otro lado, y en cuanto a la hipótesis dada por el agente de tránsito, cabe anotar que el agente de tránsito elaboró el informe de tránsito después de ocurrido el hecho, no es testigos presencial de los mismos y determina la hipótesis, la cual es una simple presunción de lo que el agente considero que pudo haber ocurrido en el hecho, y constituye la determinación de una circunstancia objetiva que posiblemente dio origen al accidente de tránsito, por lo cual el documento deberá ser debatido, y la parte demandante deberá probar de manera fehaciente lo dicho en este hecho.

Ahora bien, frente a lo manifestado en relación a que el vehículo YAP873 se encontraba afiliado a la empresa de transporte Coomoepal, es de anotar que si bien es cierto que para la fecha de los hechos esto fue así, con posterioridad a ello, el vehículo fue desvinculado de mi representada, no obstante lo aquí narrado, y como quiera que ha operado el fenómeno jurídico de la Prescripción del contrato de transporte, a las luces del artículo 993 de Código de Comercio, COOMOEPAL no se encuentra obligado a indemnizar en virtud a que ha acaecido la mencionada figura jurídica.

Es importante anotar también, que si lo mencionado en este y los anteriores hechos resulta probado, le asiste a la parte actora responsabilidad en los hechos objeto de demanda, pues asumió su propio riesgo al abordar un vehículo y no ubicarse en los sitios determinados para los pasajeros.

**Al Hecho Cuarto:** Esto no es un hecho, se trata de una apreciación errónea de la parte actora.

No obstante ello, Esto deberá ser probado de manera fehaciente por la parte actora, en virtud a la carga de la prueba que le asiste tal y como lo ordena el artículo 167 del C.G.P.

Ahora bien, en caso de que la parte actora pruebe de manera fehaciente este hecho, se debe aclarar que no le asiste a mi representada obligación alguna de indemnizar los supuestos perjuicios pretendidos por la parte demandante, pues ha operado el fenómeno de la Prescripción del contrato de transporte.

**Al Hecho Quinto:** Es cierto que se celebró el contrato de seguros mencionado, sin embargo, la acción proveniente del contrato de transporte se encuentra prescrita, y en razón a ello el despacho no podrá conceder el derecho que reclama la parte actora.

**Al Hecho Sexto:** Como quiera que lo narrado en este hecho, es del resorte exclusivo de la parte demandante y la aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa, y en nada vincula a mi representada, no



ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

---

nos consta, razón por la cual nos atenemos a lo que resulte probado en el proceso.

**Al Hecho Séptimo:** No le consta a mi representada lo consagrado en este hecho, entre otras razones por cuanto han transcurrido mas de doce años desde la ocurrencia de los supuestos hechos que dieron origen a este proceso, razón por la cual ya no se encuentra en los archivos de COOMOEPAL documentos relacionados, en primer lugar por cuanto los documentos se archivan por un término máximo de diez años, y en segundo lugar por cuanto tal y como se mencionó en respuesta a hechos anteriores, el vehículo que se vio involucrado en el accidente de tránsito, fue desvinculado de COOMOEPAL desde el año 2014, y así se puede constatar el certificado de tradición del vehículo aportado como prueba documental de la demanda.

Adicional a lo anterior, en el proceso mencionado no se encuentra vinculado mi representada.

En este orden de ideas, deberá la parte demandante probar de manera fehaciente lo aquí plasmado.

**Al Hecho Octavo:** No se trata de un hecho, es una apreciación desacertada de la parte actora, quien esta usurpando las funciones del Juez, pues el objeto del presente proceso es que el despacho se pronuncie, frente a los hechos, pretensiones de la demanda, y por supuestos frente a las excepciones propuestas, de conformidad con el acervo probatorio y la tarifa legal de la prueba y en este proceso en especial, el despacho no podrá despachar favorablemente las pretensiones de la parte actora por cuanto ha operado el fenómeno de la prescripción de la acción derivada del contrato de transporte.

**Al Hecho Noveno:** No le consta a mi representada, por lo tanto en tratándose de un hecho planteado por la parte actora solicito desde ya que sea probado de manera fehacientemente por el abogado actor. En cuanto a que el vehículo de placas **YAP-873**, no es cierto que el vehículo se encuentre afiliado a mi representada, pues la desvinculación del vehículo se dio 4 años antes de que se radicada la demanda, lo cual en virtud al principio de lealtad proceso debió haber sido manifestado por la parte actora.

**Al Hecho Decimo:** No me consta, por cuanto este hecho es una manifestación de la esfera exclusiva del conocimiento de la demandante, quien deberá probar de manera fehaciente que sufrió perjuicios de índole moral y fisiológico y todos los perjuicios que reclama.

No obstante lo anterior, se debe advertir que los ingresos no se soportan con una mera certificación de ingresos expedida por un



ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

---

contador, si no que existen documentos idóneos para ello, tal y como lo es la planilla de pago de la seguridad social como independiente, la declaración de renta, etc.

Adicionalmente y contrario a lo manifestado por la parte demandante, consultado el Registro de la Administradora de los recursos del sistema general de seguridad social en salud ADRES, se pudo determinar que no es cierto que la señora Isabel Pardo Trochez trabajaba para la fecha de los hechos, y mucho menos que percibía ingresos, pues nótese que en el pantallazo de la consulta se percibe que la señora Isabel Pardo Trochez, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.267.392, se encuentra afiliada al régimen de salud en la administradora EPS SURAMERICANA S.A., bajo el régimen contributivo y en calidad de beneficiario, desde el 29 de noviembre de 1995, lo que indica que quien cotiza es un tercero y ella se beneficia de ese tercero, quien claramente si es contribuyente al régimen en salud, hecho este que desvirtúa cualquier presunción de capacidad de ingreso y pago existente a su favor (artículos 3 y 4 de la ley 797 de 2003), de que como ciudadana colombiana devenga al menos un salario mínimo, pues esa presunción admite prueba en contrario, y este es el caso preciso, en el cual al no ser cotizante, sino beneficiaria, se determina claramente que no percibe ningún ingreso producto del supuesto oficio de confección.

Conviene también mencionar que el registro publico existente en las paginas del estado no pueden controvertirse con documentos privados, pues el registro es información veraz aportada por los mismos declarantes ante el sistema.

Adicionalmente a lo manifestado en el párrafo precedente la mera manifestación de la parte actora no es óbice para determinar que efectivamente la parte demandante se encontraban trabajando para la fecha de los hechos y generando unos ingresos y que a partir de los hechos se generaron unos perjuicios, por lo cual en el acápite correspondiente a las pruebas se solicitará al juez oficiar al Ministerio de Salud para que remitan a este proceso la información necesaria para determinar si el hecho es o no cierto, puesto que con la información que se pudo obtener de la página del Adres, no se evidencio esta información.

En todo caso, debe ser claro para el Despacho que de conformidad con consulta realizada a través de la administradora de los recursos del sistema general de seguridad social en salud - ADRES la señora ISABELPARDO TROCHEZ se encuentra afiliada a la entidad promotora de salud SURAMEICANA S.A., en el régimen contributivo pero en calidad de BENEFICIARIA, lo que contradice en su totalidad que se encontrare trabajando, tal como se observa en la siguiente imagen tomada del aludido sistema de consulta:





ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

ADRES

La salud es de todos

Minsalud

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	31267392
NOMBRES	ISABEL
APELLIDOS	PARDO TROCHEZ
FECHA DE NACIMIENTO	xx/xx/xx
DEPARTAMENTO	VALLE
MUNICIPIO	SANTIAGO DE CALI

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	EPS SURAMERICANA S.A.	CONTRIBUTIVO	29/11/1995	31/12/2999	BENEFICIARIO

Fecha de impresión:

00/10/2022 10:30:23

Estación de origen:

192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolución 4622 de 2016.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la Fecha de Afiliación Efectiva hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la Fecha de Finalización de Afiliación, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

I a responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - RDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la RDUA, corresponde directamente a su fuente de información, en este caso de las EPS, EOC y

Escribe aquí para buscar.

19°C

Torm eléc inten

641 p. m.

19/06/2022

**Al Hecho Decimo Primero:** Esto no es un hecho de la demanda, es una transcripción de algunos apartes del dictamen médico legal, el cual no determina la incapacidad del demandante, dicho dictamen tiene como objeto determinar la materialidad de la conducta en la jurisdicción penal, por lo tanto, para determinar la incapacidad médico legal, se debe aportar las incapacidades dadas por el médico tratante.

**Al Hecho Decimo Segundo:** Esto no es un hecho, es una apreciación del abogado actor frente al derecho que pretende se le reconozca con esta demanda, y que dicho sea de paso es del resorte del juez.

En cuanto a la responsabilidad del hecho en cabeza del señor Alberto Ruiz Delgado, esta manifestación debe ser probada de manera fehaciente por el abogado actor.

**Al Hecho Décimo Tercero:** Es cierto.

**Al Hecho Décimo Cuarto:** No se trata de un hecho, se trata del Juramento estimatorio, el cual debe de ubicarse en el acápite de pruebas y no en el acápite de hechos, por lo cual desde ya solicito al señor Juez no tenerse en cuenta.

No obstante, lo anterior, Me permito **OBJETAR la cuantía contenida en el JURAMENTO ESTIMATORIO** que realiza el abogado actor en la demanda, toda vez que incumple con lo preceptuado en el artículo 206 y ss. del C. G. P., En primer lugar, toda vez que el inciso 6 del artículo 206 del código general del proceso, excluye del juramento estimatorio los daños extramatrimoniales, y pese a ello el demandante cuantifica dentro del juramento estimatorio los valores correspondientes a perjuicio

Calle 9 No. 4-65 Oficina 204 Cali 3166905529  
e-mail: [adriana\\_cardosodavila@hotmail.com](mailto:adriana_cardosodavila@hotmail.com)





morales reclamados para la víctima, así como también otros perjuicios que se encuentran en el orden del daño extrapatrimonial.

Ahora bien, frente al juramento frente al daño material o patrimonial, el resarcimiento del perjuicio debe guardar correspondencia directa con la magnitud del daño causado, mas no puede superar este límite. La explicación que se da a esta regla se apoya en el principio general de derecho que determina que si el daño se indemniza por encima del realmente causado, se produce un enriquecimiento sin justa causa en favor de la víctima, de tal forma que se convierte el daño en la medida de su resarcimiento (Juan Carlos Henao, "El daño" Ed. Universidad Externado de Colombia). Este principio es una regla que deberá respetarse siempre que se persiga el resarcimiento de un perjuicio, teniendo en cuenta que lo pretendido en una demanda es la indemnización exclusiva del daño probado en el proceso, bajo el presupuesto de la prueba de los demás elementos que conforman la responsabilidad. No obstante, indicamos que las pretensiones de la presente acción no se ajustan a los parámetros legales ya que, además de no existir reproche alguno ni obligación de reparación por parte de mi representada, no se ha sustentado a través de los medios legales de prueba la existencia ni la cuantía de los montos reclamados. Ahora, como de conformidad con el principio de la necesidad de la prueba (164 del C. G. del P.) toda decisión judicial debe fundarse en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. El reconocimiento judicial de una pretensión que tenga como objeto la indemnización de un perjuicio supone la demostración de todos y cada uno de los elementos que configuran la tutela jurídica de dicha pretensión, incluyendo, por supuesto, el daño, salvo aquellos eventos de presunción de culpa, de conformidad con la doctrina de la Corte, y la presunción de daños de acuerdo con la ley, como en los casos previstos en el C. Civil.

Ahora bien, en cuanto **al lucro cesante pasado por incapacidad médico legal, por perdida de capacidad laboral (invalidez), pasado por invalidez, y futuro por invalidez**, OBJETO rotundamente EL JURAMENTO ESTIMATORIO, toda vez que no hay prueba de la supuesta incapacidad pues como ya se mencionó, el dictamen médico legal no es óbice para determinarla, ese documento privado tiene por objeto tipificar la conducta penal, mas no demostrar el término de la incapacidad, la cual debe ser determinada por el médico tratante y dicho documento brilla por su ausencia.

Para efectos de mayor claridad, transcribo apartes relacionado con el tema de INCAPACIDAD MEDICO LEGAL, contenido en el Reglamento Técnico para el abordaje Integral de Lesiones en Clínica Forense, páginas 26 y ss.

*"...La incapacidad médico-legal es uno de los conceptos fundamentales de la pericia medico legal, utilizada como medida indirecta para que la autoridad pueda definir la*



ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

---

*competencia, determinar aspectos procedimentales y tasar la sanción en aquellos casos en los cuales se investiga y procesa por el delito de Lesiones PERSONALES, SOLO O EN CONCURSO CON OTRAS CONDUCTAS PUNIBLES. En el ámbito forense los términos "incapacidad para trabajar o enfermedad" a los que se refiere el art 112 del CP se asimilan al concepto de incapacidad médico-legal."*

*"...Así pues, la incapacidad médico-legal es un criterio clínico con fines jurídicos, que establece un perito medico u odontológico basado en el análisis sobre la gravedad del daño (características, magnitud de la lesión, compromiso estructural y/o funcional, entre otros) y el tiempo necesario para el proceso de reparación de la alteración orgánica y/o fisiopatológica ocasionada. La incapacidad médico-legal siempre debe expresarse en número de días, contados siempre a partir de la fecha en que ocurrieron las lesiones."*

*"...Se concluye, entonces, que la incapacidad médico-legal se fija únicamente con los criterios clínicos de tiempo de reparación de la alteración orgánica y / o fisiopatológica causada y gravedad de la lesión. No es criterio para fijar incapacidad médico-legal la ocupación del lesionado, ya que la incapacidad variaría de acuerdo con la ocupación de la persona y no con la gravedad del daño ocasionado; además, el bien jurídicos tutelado en el delito de lesiones personales, en todas las personas es el mismo: la integridad personal. Siempre que el perito pueda conocer integralmente las lesiones, pueda tener criterio para fijar la incapacidad médico-legal."*

De otro lado, cabe resaltar que la liquidación no se encuentra realizada de manera razonable, puesto que los soportes con los cuales se pretende liquidar son documentos que contradicen el registro publico contenido en el ADRES, pues nótese como dicho registro determina que la señora Isabel Pardo Trochez es beneficiaria del régimen contributivo de salud, lo que indica que para que pueda tener plena validez la certificación de ingreso aportada, debe la parte demandante desvirtuar la información pública existente en el registro del ADRES, lo cual claramente no podrá realizar. En este orden de ideas, no existe una merma económica que requiera de una indemnización, pues mírese también que el dictamen de perdida de la capacidad laboral manifiesta que la demandante se dedica al hogar, lo cual también contradice la certificación de ingresos aportada.

Lo anterior por cuanto el demandante no ha probado a cabalidad y como le corresponde según la carga probatoria, que la supuesta víctima se encontraba trabajando al momento de los hechos, ni cual era sus ingresos a la fecha de los hechos, y a contrario sensu, lo que si se encuentra probado, es como ya se manifestó, que la demandante resultó ser beneficiaria del sistema de salud, de un particular.

Anteriormente la ley 1393 de 2010 mediante la cual se introdujo la obligación de verificar los aportes por parte de los contratantes, so pena de que el gasto no fuera deducible. Y fue allí donde el tema empezó a tener trascendencia. Muchos inicialmente aplicaron la ley a pesar de que la aplicación de la misma estaba condicionada a la expedición del reglamento.



ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

---

Con la expedición del decreto 1070 de 2013, la ley 1393 de 2010 estuvo reglamentada. El decreto señaló.

**"Artículo 3º.** *Contribuciones al Sistema General de Seguridad Social. Modificado por el art. 9, Decreto Nacional 3032 de 2013. De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1393 de 2010 y el artículo 108 del Estatuto Tributario, la disminución de la base de retención para las personas naturales residentes cuyos ingresos no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, por concepto de contribuciones al Sistema General de Seguridad Social, pertenezcan o no a la categoría de empleados, estará condicionada a su pago en debida forma, para lo cual se adjuntará a la respectiva factura o documento equivalente copia de la planilla o documento de pago.*

*Para la procedencia de la deducción en el impuesto sobre la renta de los pagos realizados a las personas mencionadas en el inciso anterior, el contratante deberá verificar que el pago de dichas contribuciones al Sistema General de Seguridad Social esté realizado en debida forma, en relación con los ingresos obtenidos por los pagos relacionados con el contrato respectivo, en los términos del artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, aquellas disposiciones que la adicionen, modifiquen o sustituyan, y demás normas aplicables en la materia."* (Subrayado propio)

Así las cosas, claramente no podrá el juez de instancia reconocer una indemnización por perjuicios materiales que no ha sido debidamente demostrado por la parte actora, quien tiene la obligación procesal de hacerlo.

Ahora bien, en cuanto **al daño moral y al daño a la vida en relacion**, OBJETO rotundamente por cuanto el daño moral comporta el menoscabo a la dimensión afectiva, los sentimientos, el amor en la familia, la parte social, los atentados contra el honor, la reputación, las consideraciones sociales; por lo mismo, no puede establecerse a partir de métodos matemáticos como acontece con los perjuicios materiales. Varios criterios han desarrollado la jurisprudencia para calcularlos:

«Dada la inasible naturaleza del daño no patrimonial, debe buscarse, "con ayuda del buen sentido (...) y con apoyo en hechos probados que den cuenta de las circunstancias personales de los damnificados reclamantes, una relativa satisfacción para estos últimos proporcionándoles de ordinario una suma de dinero que no deje incólume la agresión, pero que tampoco represente un lucro injustificado que acabe por desvirtuar la función institucional que prestaciones de ese linaje están llamadas a cumplir" (sentencia de 25 de noviembre de 1992. Exp. 3382); consideraciones éstas que aun cuando se expresaron con relación al daño moral, resultan perfectamente aplicables a toda clase de perjuicio extra-patrimonial, incluido el daño a la vida de relación.



A diferencia de la estimación de los perjuicios patrimoniales, para los que existen en la mayoría de las ocasiones datos objetivos que sirven de apoyo para su cuantificación, el perjuicio extrapatrimonial ha estado y seguirá estando confiado al discreto arbitrio de los funcionarios judiciales, lo que no **"equivale a abrirle paso a antojadizas intuiciones pergeñadas a la carrera para sustentar condenas excesivas, sino que a dichos funcionarios les impone el deber de actuar con prudencia, evitando en primer lugar servirse de pautas apriorísticas..."**. (Resaltado fuera de texto)

No pueden, por tanto, fijarse o establecerse parámetros generales que en forma mecánica se apliquen a la valoración de tal clase de perjuicio, pues cada caso concreto ofrece particularidades que deberán ser apreciadas por el juez al momento de hacer la correspondiente tasación»7.

Ahora bien, corresponde señalar que los criterios para la determinación del perjuicio moral subjetivo vienen dados por la naturaleza del daño, las condiciones personales de quien lo ha sufrido y las pautas que ha tenido en cuenta la jurisprudencia en casos análogos (subrayas y negrillas mías), en orden a adoptar decisiones equitativas.

En igual sentido se ha pronunciado el Consejo de estado, para lo cual ha dicho:

*la jurisprudencia de la Sección Tercera señaló que **la valoración de la gravedad o levedad de la lesión** es el referente que permite ubicar el quantum indemnizatorio que le corresponde a quien alegue el perjuicio moral, dentro de los parámetros establecidos en la sentencia de unificación. Además de manera reiterada ha sostenido que esa cuantificación debe ser definida en cada caso por el juez, en proporción al daño sufrido, a las circunstancias particulares de las causas y consecuencias de la lesión y según lo que se pruebe en el proceso.*

De conformidad con la lesión, debemos decir entonces que la pretensión de la parte demandante respecto a este rubro de daño moral supera los límites establecidos para una lesión como la que supuestamente presenta la señora Isabel Pardo Trochez.

En todo caso es necesario que la parte actora demuestre de manera fehaciente, no solo la existencia del perjuicio de daño moral y daño a la vida en relación, si no también debe darle al juzgador los elementos para su tasación.

**Al Hecho Décimo Quinto:** No se trata de un hecho, se trata de una prueba, sine qua non, se podría ejercer la acción por parte del abogado actor.

## **FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA**



ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

---

Me opongo señor Juez a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por carecer de sustento de hecho y de derecho que hagan viable su prosperidad, entre otras razones por cuanto en materia de indemnización de perjuicios, a más de imperar el principio de que el daño debe estar plenamente comprobado, así como la cuantía del mismo, definitivamente el tema de la responsabilidad e indemnización se rige por las normas que sobre la materia contiene el código civil y los artículo 164 y 167 del CGP entre otras normas.

Ahora bien, se destaca que en el derecho colombiano prima el principio universal de la carga de la prueba, conforme al cual, quien alegue un hecho del que pretenda derivar consecuencias jurídicas o económicas, debe comprobar su realización. Es por eso que en materia de responsabilidad quien demanda una indemnización debe probar que se reúnen los requisitos que conforman esa clase de vínculo jurídico, estos con el hecho, la culpa o el dolo, el daño o perjuicio y la imprescindible relación de causalidad ente el primero y este último.

En nuestro caso particular, debe resaltarse que conforme a lo expresado por la parte actora en su libelo, no basta alegar el supuesto detrimento por cuanto el mismo no es susceptible de presunción, sino que es menester acreditar debidamente su producción, esto comprende su identificación y obviamente su cuantificación cierta, toda vez, que al funcionario juzgador le está vedado presumir un perjuicio y se tiene que concretar a lo que se encuentra ciertamente acreditado en el expediente, de manera que lo que no está allí, simplemente no existe y por ende no puede ser considerado por el juzgador.

Lo anterior exige que la comprobación del supuesto daño sea satisfactoria, es decir suficientemente con pruebas documentales auténticas, confirmadas, veraces, y otros medios de prueba que los corroboren para que en el ejercicio de la elevada función de impartir justicia sea posible aplicar atinadamente el método de la sana crítica para la acertada valoración del acervo probatorio.

En este orden de ideas es evidente que la parte actora peca porque carece absolutamente de demostración de sus afirmaciones sobre el origen del perjuicio, la existencia del perjuicio, su naturaleza y su valor o cuantía.

Por lo tanto están llamadas al fracaso las pretensiones que esgrime el demandante, en una infundada estimación de la cuantía de su hipotético perjuicio, pues eso no lo releva de la carga de probarlo fehacientemente.

Considerando lo anteriormente expuesto resulta inexistente la responsabilidad que se le quiere endilgar a los demandados, todo esto sin perjuicios de los aspectos particulares de la defensa que estamos





ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

---

esgrimiendo y por ello ruego condenar en costas al demandado pues resulta temerario su acción y las pretensiones de su demanda.

**Así las cosas, y frente a las pretensiones, me pronuncio específicamente de la siguiente manera:**

**Frente a la Primera Pretensión:** Me opongo a que se declare que el señor ALBERTO RUIZ DELGADO, como conductor del vehículo de placas YAP-873 genero la causa efectiva del accidente de tránsito ocurrido el día 10 de febrero de 2010, en el que la señora ISABEL PARDO TROCHEZ, supuestamente sufrió lesiones en su integridad, toda vez que no se encuentra demostrada la existencia del hecho, y adicionalmente sin que ello implique aceptación de responsabilidad alguna, en caso de demostrarse por parte del actor, la acción derivada del contrato de transporte se encuentra prescrita a las luces del artículo 993 del código de comercio, que consagra el régimen especial de prescripción y caducidad de las acciones legales que se puedan derivar del contrato de transporte.

**Frente a la Segunda Pretensión:** Me opongo a que se declare que Hernán Duque Sánchez es civilmente y contractualmente responsable por todos los daños y perjuicios ocasionados a la señora Isabel Pardo Troches toda vez que no se encuentra demostrada la existencia del hecho, y adicionalmente sin que ello implique aceptación de responsabilidad alguna, en caso de demostrarse por parte del actor, la acción derivada del contrato de transporte se encuentra prescrita a las luces del artículo 993 del código de comercio, que consagra el régimen especial de prescripción y caducidad de las acciones legales que se puedan derivar del contrato de transporte.

**Frente a la Tercera Pretensión:** Me opongo a que se declare que mi representada Cooperativa Especializada de Transportes Coomoepal es civil y contractualmente responsable por todos los daños y perjuicios ocasionados a la señora Isabel Pardo Troches dentro del marco del contrato de seguro, en razón a los siguiente:

- 1.) Esta pretensión no podrá prosperar frente a mi representada, por cuanto no hay una congruencia entre los hechos de la demanda y lo pedido.
- 2.) La pretensión no podrá prosperar, por cuanto precisamente, tal y como esta pretendido por la parte actora, en relación con el contrato de seguro, quien esta obligada a responder por las pretensiones será la aseguradora, pues en términos generales el objeto del contrato es precisamente que la aseguradora responda por los hechos acaecidos en vigencia del contrato siempre y cuando el hecho se encuentre amparado.



ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

---

**Frente a la Cuarta Pretensión:** Me opongo a que se declare que mi representada Cooperativa Especializada de Transportes Coomoepal es civil y contractualmente responsable por todos los daños y perjuicios ocasionados a la señora Isabel Pardo Troches dentro del marco del contrato de seguro, en razón a los siguiente:

- 1.) Esta pretensión no podrá prosperar frente a mi representada, por cuanto no hay una congruencia entre los hechos de la demanda y lo pedido.
- 2.) La pretensión no podrá prosperar, por cuanto precisamente, tal y como esta pretendido por la parte actora, en relación con el contrato de seguro, quien está obligada a responder por las pretensiones será la aseguradora, pues en términos generales el objeto del contrato es precisamente que la aseguradora responda por los hechos acaecidos en vigencia del contrato siempre y cuando el hecho se encuentre amparado.

**Frente a la Quinta Pretensión:** Me opongo a que se declare que mi representada Cooperativa Especializada de Transportes Coomoepal se declare responsable de indemnizar a la demandante toda vez que:

- 1.) Esta pretensión no podrá prosperar frente a mi representada, por cuanto no hay una congruencia entre los hechos de la demanda y lo pedido.
- 2.) No se encuentran probados los presupuestos para endilgar responsabilidad civil en cabeza de los demandados.
- 3.) Las acciones derivadas del contrato de transporte se encuentran prescritas a las luces del artículo 993 del Código de Comercio, puesto que la demanda fue presentada el 16 de enero de 2018 y los hechos ocurrieron con fecha 10 de febrero de 2010, es decir tardo 8 años en ejercer una acción, a la cual la ley le da un termino de 2 años para ejercerla.

por todos los daños y perjuicios ocasionados a la señora Isabel Pardo Troches dentro del marco del contrato de seguro, en razón a los siguiente:

### **FRENTE A LA LIQUIDACION DE PERJUICIOS DISCRIMINADOS**

### **FRENTE AL LUCRO CESANTE POR INCAPACIDAD, POR INVALIDES Y FUTURO.**

Lo primero que debemos decir frente a esta pretensión, es que no hay prueba de la supuesta incapacidad pues como ya se mencionó, el dictamen médico legal no es óbice para determinarla, ese documento





ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

---

privado tiene por objeto tipificar la conducta penal, mas no demostrar el término de la incapacidad, la cual debe ser determinada por el médico tratante y dicho documento brilla por su ausencia.

Para efectos de mayor claridad, transcribo apartes relacionado con el tema de INCAPACIDAD MEDICO LEGAL, contenido en el Reglamento Técnico para el abordaje Integral de Lesiones en Clínica Forense, páginas 26 y ss.

*"...La incapacidad médico-legal es uno de los conceptos fundamentales de la pericia medico legal, utilizada como medida indirecta para que la autoridad pueda definir la competencia, determinar aspectos procedimentales y tasar la sanción en aquellos casos en los cuales se investiga y procesa por el delito de Lesiones PERSONALES, SOLO O EN CONCURSO CON OTRAS CONDUCTAS PUNIBLES. En el ámbito forense los términos "incapacidad para trabajar o enfermedad" a los que se refiere el art 112 del CP se asimilan al concepto de incapacidad médico-legal."*

*"...Así pues, la incapacidad médico-legal es un criterio clínico con fines jurídicos, que establece un perito medico u odontológico basado en el análisis sobre la gravedad del daño (características, magnitud de la lesión, compromiso estructural y/o funcional, entre otros) y el tiempo necesario para el proceso de reparación de la alteración orgánica y/o fisiopatológica ocasionada. La incapacidad médico-legal siempre debe expresarse en número de días, contados siempre a partir de la fecha en que ocurrieron las lesiones."*

*"...Se concluye, entonces, que la incapacidad médico-legal se fija únicamente con los criterios clínicos de tiempo de reparación de la alteración orgánica y / o fisiopatológica causada y gravedad de la lesión. No es criterio para fijar incapacidad médico-legal la ocupación del lesionado, ya que la incapacidad variaría de acuerdo con la ocupación de la persona y no con la gravedad del daño ocasionado; además, el bien jurídicos tutelado en el delito de lesiones personales, en todas las personas es el mismo: la integridad personal. Siempre que el perito pueda conocer integralmente las lesiones, poda tener criterio para fijar la incapacidad médico-legal."*

De otro lado, cabe resaltar que la liquidación no se encuentra realizada de manera razonable, puesto que los soportes con los cuales se pretende liquidar son documentos que contradicen el registro público contenido en el ADRES, pues nótese como dicho registro determina que la señora Isabel Pardo Trochez es beneficiaria del régimen contributivo de salud, lo que indica que para que pueda tener plena validez la certificación de ingreso aportada, debe la parte demandante desvirtuar la información pública existente en el registro del ADRES, lo cual claramente no podrá realizar. En este orden de ideas, no existe una merma económica que requiera de una indemnización, pues mírese también que el dictamen de perdida de la capacidad laboral manifiesta que la demandante se dedica al hogar, lo cual también contradice la certificación de ingresos aportada, la cual no es el documento idóneo para determinar ingresos de una persona.

Lo anterior por cuanto el demandante no ha probado a cabalidad y como le corresponde según la carga probatoria, que la supuesta víctima se encontraba trabajando al momento de los hechos, ni cual era sus ingresos a la fecha de los hechos, y a contrario sensu, lo que si se



ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

---

encuentra probado, es como ya se manifestó, que la demandante resultó ser beneficiaria del sistema de salud, de un particular.

Anteriormente la ley 1393 de 2010 mediante la cual se introdujo la obligación de verificar los aportes por parte de los contratantes, so pena de que el gasto no fuera deducible. Y fue allí donde el tema empezó a tener trascendencia. Muchos inicialmente aplicaron la ley a pesar de que la aplicación de la misma estaba condicionada a la expedición del reglamento.

Con la expedición del decreto 1070 de 2013, la ley 1393 de 2010 estuvo reglamentada. El decreto señaló.

**"Artículo 3º. Contribuciones al Sistema General de Seguridad Social.** Modificado por el art. 9, Decreto Nacional 3032 de 2013. De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1393 de 2010 y el artículo 108 del Estatuto Tributario, la disminución de la base de retención para las personas naturales residentes cuyos ingresos no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, por concepto de contribuciones al Sistema General de Seguridad Social, pertenezcan o no a la categoría de empleados, estará condicionada a su pago en debida forma, para lo cual se adjuntará a la respectiva factura o documento equivalente copia de la planilla o documento de pago.

Para la procedencia de la deducción en el impuesto sobre la renta de los pagos realizados a las personas mencionadas en el inciso anterior, el contratante deberá verificar que el pago de dichas contribuciones al Sistema General de Seguridad Social esté realizado en debida forma, en relación con los ingresos obtenidos por los pagos relacionados con el contrato respectivo, en los términos del artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, aquellas disposiciones que la adicionen, modifiquen o sustituyan, y demás normas aplicables en la materia." (Subrayado propio)

Así las cosas, claramente no podrá el juez de instancia reconocer una indemnización por perjuicios materiales que no ha sido debidamente demostrado por la parte actora, quien tiene la obligación procesal de hacerlo.

Ahora bien, en cuanto **al daño moral y al daño a la vida en relacion**, OBJETO rotundamente por cuanto el daño moral comporta el menoscabo a la dimensión afectiva, los sentimientos, el amor en la familia, la parte social, los atentados contra el honor, la reputación, las consideraciones sociales; por lo mismo, no puede establecerse a partir de métodos matemáticos como acontece con los perjuicios materiales. Varios criterios han desarrollado la jurisprudencia para calcularlos:

«Dada la inasible naturaleza del daño no patrimonial, debe buscarse, "con ayuda del buen sentido (...) y con apoyo en hechos probados que den cuenta de las circunstancias personales de los damnificados



reclamantes, una relativa satisfacción para estos últimos proporcionándoles de ordinario una suma de dinero que no deje incólume la agresión, pero que tampoco represente un lucro injustificado que acabe por desvirtuar la función institucional que prestaciones de ese linaje están llamadas a cumplir” (sentencia de 25 de noviembre de 1992. Exp. 3382); consideraciones éstas que aun cuando se expresaron con relación al daño moral, resultan perfectamente aplicables a toda clase de perjuicio extra-patrimonial, incluido el daño a la vida de relación.

A diferencia de la estimación de los perjuicios patrimoniales, para los que existen en la mayoría de las ocasiones datos objetivos que sirven de apoyo para su cuantificación, el perjuicio extrapatrimonial ha estado y seguirá estando confiado al discreto arbitrio de los funcionarios judiciales, lo que no **“equivale a abrirle paso a antojadizas intuiciones pergeñadas a la carrera para sustentar condenas excesivas, sino que a dichos funcionarios les impone el deber de actuar con prudencia, evitando en primer lugar servirse de pautas apriorísticas...”**. (Resaltado fuera de texto)

No pueden, por tanto, fijarse o establecerse parámetros generales que en forma mecánica se apliquen a la valoración de tal clase de perjuicio, pues cada caso concreto ofrece particularidades que deberán ser apreciadas por el juez al momento de hacer la correspondiente tasación»7.

Ahora bien, corresponde señalar que los criterios para la determinación del perjuicio moral subjetivo vienen dados por la naturaleza del daño, las condiciones personales de quien lo ha sufrido y las pautas que ha tenido en cuenta la jurisprudencia en casos análogos (subrayas y negrillas mías), en orden a adoptar decisiones equitativas.

En igual sentido se ha pronunciado el Consejo de estado, para lo cual ha dicho:

*la jurisprudencia de la Sección Tercera señaló que **la valoración de la gravedad o levedad de la lesión** es el referente que permite ubicar el quantum indemnizatorio que le corresponde a quien alegue el perjuicio moral, dentro de los parámetros establecidos en la sentencia de unificación. Además de manera reiterada ha sostenido que esa cuantificación debe ser definida en cada caso por el juez, en proporción al daño sufrido, a las circunstancias particulares de las causas y consecuencias de la lesión y según lo que se pruebe en el proceso.*

De conformidad con la lesión, debemos decir entonces que la pretensión de la parte demandante respecto a este rubro de daño moral supera los límites establecidos para una lesión como la que supuestamente presenta la señora Isabel Pardo Trochez.

En todo caso es necesario que la parte actora demuestre de manera fehaciente, no solo la existencia del perjuicio de daño moral y daño a la



vida en relación, si no también debe darle al juzgador los elementos para su tasación.

### **FRENTE AL JURAMENTO ESTIMATORIO**

Me permito **OBJETAR la cuantía contenida en el JURAMENTO ESTIMATORIO** que realiza el abogado actor en la demanda, toda vez que incumple con lo preceptuado en el artículo 206 y ss. del C. G. P., En primer lugar, me opongo al juramento estimatorio, toda vez que el inciso 6 del artículo 206 del código general del proceso, excluye del juramento estimatorio los daños extramatrimoniales, y pese a ello el demandante cuantifica dentro del juramento estimatorio los valores correspondientes a perjuicio morales reclamados para la víctima, así como también otros perjuicios que se encuentran en el orden del daño extrapatrimonial.

Ahora bien, frente al juramento frente al daño material o patrimonial, el resarcimiento del perjuicio debe guardar correspondencia directa con la magnitud del daño causado, mas no puede superar este límite. La explicación que se da a esta regla se apoya en el principio general de derecho que determina que si el daño se indemniza por encima del realmente causado, se produce un enriquecimiento sin justa causa en favor de la víctima, de tal forma que se convierte el daño en la medida de su resarcimiento (Juan Carlos Henao, "El daño" Ed. Universidad Externado de Colombia). Este principio es una regla que deberá respetarse siempre que se persiga el resarcimiento de un perjuicio, teniendo en cuenta que lo pretendido en una demanda es la indemnización exclusiva del daño probado en el proceso, bajo el presupuesto de la prueba de los demás elementos que conforman la responsabilidad. No obstante, indicamos que las pretensiones de la presente acción no se ajustan a los parámetros legales ya que, además de no existir reproche alguno ni obligación de reparación por parte de mi representada, no se ha sustentado a través de los medios legales de prueba la existencia ni la cuantía de los montos reclamados. Ahora, como de conformidad con el principio de la necesidad de la prueba (164 del C. G. del P.) toda decisión judicial debe fundarse en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. El reconocimiento judicial de una pretensión que tenga como objeto la indemnización de un perjuicio supone la demostración de todos y cada uno de los elementos que configuran la tutela jurídica de dicha pretensión, incluyendo, por supuesto, el daño, salvo aquellos eventos de presunción de culpa, de conformidad con la doctrina de la Corte, y la presunción de daños de acuerdo con la ley, como en los casos previstos en el C. Civil.

En cuanto **al lucro cesante pasado por incapacidad médico legal, por perdida de capacidad laboral (invalidéz), pasado por invalidéz, y futuro por invalidéz**, OBJETO rotundamente EL JURAMENTO ESTIMATORIO, a la pretensión de lucro cesante por



incapacidad, por invalidez y futuro por un valor de \$41.881.735, toda vez que no hay prueba de la supuesta incapacidad pues como ya se mencionó, el dictamen médico legal no es óbice para determinarla, ese documento privado tiene por objeto tipificar la conducta penal, mas no demostrar el término de la incapacidad, la cual debe ser determinada por el médico tratante y dicho documento brilla por su ausencia.

Para efectos de mayor claridad, transcribo apartes relacionado con el tema de INCAPACIDAD MEDICO LEGAL, contenido en el Reglamento Técnico para el abordaje Integral de Lesiones en Clínica Forense, páginas 26 y ss.

*"...La incapacidad médico-legal es uno de los conceptos fundamentales de la pericia medico legal, utilizada como medida indirecta para que la autoridad pueda definir la competencia, determinar aspectos procedimentales y tasar la sanción en aquellos casos en los cuales se investiga y procesa por el delito de Lesiones PERSONALES, SOLO O EN CONCURSO CON OTRAS CONDUCTAS PUNIBLES. En el ámbito forense los términos "incapacidad para trabajar o enfermedad" a los que se refiere el art 112 del CP se asimilan al concepto de incapacidad médico-legal."*

*"...Así pues, la incapacidad médico-legal es un criterio clínico con fines jurídicos, que establece un perito medico u odontológico basado en el análisis sobre la gravedad del daño (características, magnitud de la lesión, compromiso estructural y/o funcional, entre otros) y el tiempo necesario para el proceso de reparación de la alteración orgánica y/o fisiopatológica ocasionada. La incapacidad médico-legal siempre debe expresarse en número de días, contados siempre a partir de la fecha en que ocurrieron las lesiones."*

*"...Se concluye, entonces, que la incapacidad médico-legal se fija únicamente con los criterios clínicos de tiempo de reparación de la alteración orgánica y / o fisiopatológica causada y gravedad de la lesión. No es criterio para fijar incapacidad médico-legal la ocupación del lesionado, ya que la incapacidad variaría de acuerdo con la ocupación de la persona y no con la gravedad del daño ocasionado; además, el bien jurídicos tutelado en el delito de lesiones personales, en todas las personas es el mismo: la integridad personal. Siempre que el perito pueda conocer integralmente las lesiones, pueda tener criterio para fijar la incapacidad médico-legal."*

De otro lado, cabe resaltar que la liquidación no se encuentra realizada de manera razonable, puesto que los soportes con los cuales se pretende liquidar son documentos que contradicen el registro público contenido en el ADRES, pues nótese como dicho registro determina que la señora Isabel Pardo Trochez es beneficiaria del régimen contributivo de salud, lo que indica que para que pueda tener plena validez la certificación de ingreso aportada, debe la parte demandante desvirtuar la información pública existente en el registro del ADRES, lo cual claramente no podrá realizar. En este orden de ideas, no existe una merma económica que requiera de una indemnización, pues mírese también que el dictamen de pérdida de la capacidad laboral manifiesta que la demandante se dedica al hogar, lo cual también contradice la certificación de ingresos aportada.

Lo anterior por cuanto el demandante no ha probado a cabalidad y como le corresponde según la carga probatoria, que la supuesta víctima se





ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

---

encontraba trabajando al momento de los hechos, ni cual era sus ingresos a la fecha de los hechos, y a contrario sensu, lo que si se encuentra probado, es como ya se manifestó, que la demandante resultó ser beneficiaria del sistema de salud, de un particular.

Anteriormente la ley 1393 de 2010 mediante la cual se introdujo la obligación de verificar los aportes por parte de los contratantes, so pena de que el gasto no fuera deducible. Y fue allí donde el tema empezó a tener trascendencia. Muchos inicialmente aplicaron la ley a pesar de que la aplicación de la misma estaba condicionada a la expedición del reglamento.

Con la expedición del decreto 1070 de 2013, la ley 1393 de 2010 estuvo reglamentada. El decreto señaló.

**"Artículo 3º. Contribuciones al Sistema General de Seguridad Social. Modificado por el art. 9, Decreto Nacional 3032 de 2013. De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1393 de 2010 y el artículo 108 del Estatuto Tributario, la disminución de la base de retención para las personas naturales residentes cuyos ingresos no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, por concepto de contribuciones al Sistema General de Seguridad Social, pertenezcan o no a la categoría de empleados, estará condicionada a su pago en debida forma, para lo cual se adjuntará a la respectiva factura o documento equivalente copia de la planilla o documento de pago.**

**Para la procedencia de la deducción en el impuesto sobre la renta de los pagos realizados a las personas mencionadas en el inciso anterior, el contratante deberá verificar que el pago de dichas contribuciones al Sistema General de Seguridad Social esté realizado en debida forma, en relación con los ingresos obtenidos por los pagos relacionados con el contrato respectivo, en los términos del artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, aquellas disposiciones que la adicionen, modifiquen o sustituyan, y demás normas aplicables en la materia.**" (Subrayado propio)

Así las cosas, claramente no podrá el juez de instancia reconocer una indemnización por perjuicios materiales que no ha sido debidamente demostrado por la parte actora, quien tiene la obligación procesal de hacerlo.

### **FRENTE A LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO**

No le asiste a la parte demandante el derecho invocado.

### **FRENTE A LA RELACION DE PRUEBAS**



ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

---

Frente al acápite probatorio, solicito desde ya que se de aplicación a las normas del Código General del Proceso, es decir que se imponga a cada parte probar el supuesto hecho alegado.

De otro lado solicito al señor Juez tener únicamente como pruebas, las relacionadas en el respectivo acápite de pruebas, y no otras relacionadas en la demanda por fuera del acápite respectivo.

Adicional a lo anterior solicito que solo se tengan como prueba en contra de mi representada las pruebas que legamente le fueron trasladadas a mi representada

### **1.) FRENTE A LAS PRUEBAS DOCUMENTALES**

En términos generales, las pruebas documentales no me opongo a que sean tenidas como tal, siempre que se haya cumplido de manera precisa con los requisitos exigidos por las normas de procedimiento civil, por lo tanto, requieren de su respectiva verificación, para que sean tenidos en cuenta dentro de un proceso civil.

Ahora bien, como quiera que la historia y los dictámenes medico legales y el dictamen de la Junta Regional de Invalidez del Valle del Cauca, son documentos privados, pues gozan de la reserva legal y privacidad de una historia clínica, solicito al señor Juez, en virtud al principio de la contradicción de la prueba, dar aplicación al artículo 262 del Código General del Proceso, y en ese sentido citar y hacer comparecer a los autores de los mencionados documentos privados, con el fin de que rindan declaración sobre la autoría, alcance y contenido del documento.

La anterior manifestación, tiene su fundamento en la siguiente normatividad:

El artículo 34 de la ley 23 de 1981 define la historia clínica de la siguiente forma:

*«La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la Ley.»*

Por su parte el literal a) del artículo 1º de la Resolución 1995 de 1999 expedida por el ministerio de salud colombiano, señala:

*«La Historia Clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho*





ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

---

*documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley.»*

Ahora bien, en tratándose de una prueba documental que está siendo desconocida por la parte demandada, la citación y la comparecencia de los terceros de quienes, emana dichos documentos, debe ser por intermedio de la parte quien solicito la prueba, esto por la parte demandante quien la aporta al proceso, en razón a la cercanía con la prueba quien le atribuye esta responsabilidad, pues nótese que la parte demandada solo pretende realizar el derecho de contradicción de la prueba desconocida.

De acuerdo a lo anterior, desconocemos todo documento no firmado, ni manuscrito por mi representada, lo mismo que contra documentos privados, dispositivos o declarativos emanados de terceros.

Frente a los reconocimientos médicos legales, identificado con el numeral 11 del acápite de pruebas documentales, por tratarse de documentos privados (relacionado con información confidencial del demandante con reserva legal), solicito su ratificación.

Frente a la copia del dictamen de la calificación de la perdida de la capacidad labora de la señora Isabel Pardo Trochez, identificado con el numeral 12 del acápite de pruebas documentales, por tratarse de un documento privado de contenido declarativo (relacionado con información confidencial del demandante con reserva legal), solicito su ratificación.

Frente a la certificación de ingresos de la señora Isabel Pardo Trochez, identificada con el numeral 13 del acápite de las pruebas documentales, solicito su ratificación.

Frente a la historia clínica de la señora Isabel Pardo Trochez, identificado con el numeral 14 del acápite de pruebas documentales, por tratarse de documentos privados (relacionado con información confidencial del demandante con reserva legal), solicito su ratificación.

Cabe anotar señor Juez, que por la cercanía de la prueba la carga argumentativa o de autenticidad de la prueba le corresponde a quien aporta el documento que se desconoce o del cual se solicita su ratificación.

Frente a la prueba trasladada, solicito se niegue por improcedente, por cuanto según las reglas para tener en cuenta la prueba trasladada, se tiene que la parte contra la que se aduce, haya sido parte en el proceso de origen, y haya tenido la oportunidad de controvertirla, lo cual no sucedió, de otro lado por cuanto la parte que solicita la prueba tuvo tiempo suficiente para haberla solicitado y aportado como prueba dentro del presente proceso, pues nótese que lo que se pretende es que el



ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

---

juez realice una actividad probatoria que pudo haber realizado y aportado la parte interesada, yendo esta solicitud de la parte actora en contra de lo establecido por el inciso segundo del artículo 173 del C. G del P., que determina que el "(...)juez se abstendrá de ordenar la práctica de pruebas que, directamente o por medio del derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite(...)",

### **FRENTE A LAS PRUEBAS TESTIMONIALES**

Mo me opongo al decreto de las pruebas testimoniales, pero me reservo el derecho de contrainterrogar a los testigos, y de la tacha de los mismos de conformidad con el artículo 211 del Código General del proceso.

### **FRENTE AL PROCEDIMIENTO, CUANTIA Y COMPETENCIA**

Es usted competente para conocer del presente proceso señor Juez, en razón a la cuantía, la que debo decir se encuentra estimada de manera errónea, desbordada y sin cumplir con los parámetros del artículo 206 del código general del proceso.

### **PROPOSICION DE EXCEPCIONES DE FONDO**

A nombre de mis poderdantes propongo las siguientes excepciones de fondo, sin que se pueda entender que al proponer las excepciones se esté aceptando responsabilidad alguna por parte de mi representada ni de los demás demandados:

#### **1.) PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE TRANSPORTE**

Fundamento la presente excepción en el sentido de manifestar al despacho que las acciones que se derivan del contrato de transporte narrado en la demanda se encuentran prescrita por cuanto según los hechos, estos acaecieron el día 10 de febrero de 2010, y la acción fue incoada el 16 de enero de 2018, es decir 8 años después, cuando según la normatividad especial relativa al contrato de transporte da al accionante un término de dos años para su ejercicio, término que esta más que superado.

Cabe anotar que el contrato de transporte a las luces del artículo 981 del Código de Comercio, constituye un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con la otra, a cambio de un precio a conducir de un lugar a otro, por determinado medio y en el plazo fijado, personas o cosas y entregar estas al destinatario.



ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

---

a contraprestación económica y que con relación a la prescripción de las

No obstante, lo anterior, es importante traer a colación que, frente al contrato de transporte, el artículo 993 del Código de Comercio, consagra un régimen especial de prescripción y caducidad de las acciones legales que proceden, tal y como se puede vislumbrar en las siguientes normas:

**"Art. 993. Prescripción de acciones.** Modificado. Decreto 01 de 1990, Art. 11. Las acciones directas o indirectas provenientes del contrato de transporte prescriben en dos años.

*El término de prescripción correrá desde el día en que haya concluido o debido concluir la obligación de conducción.*

*Este término no puede ser modificado por las partes"*

De conformidad con la mencionada norma, y como quiera que lo que se demanda es una responsabilidad generada de un contrato de transporte, debe decirse que las acciones que tenía la demandante para el cobro de sus supuestos perjuicios en contra de mi representada, prescribieron el día 10 de febrero del año 2012, toda vez que según el acápite de los hechos, este ocurrió el día 10 de febrero de 2010, pero al revisar las piezas procesales que conforman el sumario, se evidencia que la demanda fue presentada el día 16 de enero de 2018, es decir 8 años después de la ocurrencia del hecho, y 6 años después de que operara el fenómeno de la prescripción de las acciones derivadas del contrato de transporte.

Se aúna a lo anterior, que para la Cooperativa Especializada de Motoristas y Transportadores COOMOEPAL, la presentación de la demanda no interrumpió el termino Prescriptivo, esto en atención a lo reglado en el artículo 94 del C G del P. que a la letra reza:

**ARTÍCULO 94. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD Y CONSTITUCIÓN EN MORA.** La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado.

Así las cosas, y como quiera que el auto admisorio de la demanda no fue notificada a mi representada dentro del año siguiente de la notificación del mismo auto al demandante, el término de la Caducidad como el de la Prescripción siguieron corriendo en favor de mi representada en este caso, en razón a que tan solo en el año 2022, se está notificando del auto admisorio de la demanda, lo que significa que para mí representada transcurrió el termino de 12 años desde la ocurrencia del hecho, tiempo más que suficiente para que el despacho se pronuncie de manera oficiosa con la Caducidad de la acción y de manera rogada



ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

---

frente a la Prescripción de la Acción, por cuanto para la fecha de presentación de la demanda, ya no existía para el demandante la posibilidad de exigir indemnización alguna de los supuestos perjuicios pretendidos y que claramente expone la parte actora como producto de un contrato de transporte.

De acuerdo a lo mencionado, solicito al despacho pronunciarse frente a la presente excepción declarándola probada, en virtud a los planteamientos esbozados, especialmente a lo consagrado en el artículo 993 del Código de Comercio.

En todo caso si no se tratase de responsabilidad civil contractual, si no que fuera extracontractual, también estuviese prescrita, pues la notificación de la demanda ha sido 12 años después de la ocurrencia de los hechos, toda vez que no se ha interrumpido el termino de prescripción, en razón a lo reglado en el articulo 94 del C.G del P.

## **2.) AUSENCIA DE PRUEBA DEL SUPUESTO HECHO**

Fundamento esta excepción en el sentido de manifestar que el abogado actor presenta demanda civil en contra de mí representada, sin que en la misma acredite la ocurrencia de los hechos de la demanda.

Significa lo anterior que, a más de relatar unos hechos en el acápite respectivo de la demanda, el actor tiene la obligación legal de soportar dichos hechos, con cualquiera de los medios probatorios reconocidos en el código general del proceso. Es decir, el actor no prueba la supuesta responsabilidad de mi representado en los hechos que se le endilgan.

De esta excepción me pronunciare en su debido momento, pero desde ya solicito se declara probada.

## **3.) INEXISTENCIA DE HECHOS GENERADORES DE RESPONSABILIDAD**

En el presente proceso, se carece entonces de elementos sustanciales para configurar la responsabilidad, bien sea por acción o por omisión, pues debe probarse que el comportamiento dañoso generador de responsabilidad pudo consistir en una Acción positiva, que ocasiono el daño a la víctima o una Acción omisiva, que hubiera evitado realizar algún comportamiento que hubiera impedido un daño para la víctima. En la omisión, es especialmente importante la imputación objetiva: para imputar un daño a una omisión hay que establecer un deber de interferir en la cadena dañosa.



ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

---

Así las cosas y no habiéndose acreditado los elementos esenciales de la responsabilidad civil, entre ellos el vínculo entre el hecho dañoso y el daño, no es posible determinar una responsabilidad en cabeza de mi representada.

De esta excepción me pronunciare en su momento procesal oportuno, pero desde ya solicito se declare probada.

#### **4.) CARENCIA DE PRUEBA DEL SUPUESTO PERJUICIO**

Dentro del proceso instaurado en contra de mi representado, no se ha probado con el material probatorio aportado en la presentación del escrito demandatorio, que ciertamente la demandante Isabel Pardo Trochez haya sufrido los perjuicios que dice se le deben, pues no ha aportado por ningún medio probatorio veraz, que para la fecha de los hechos generaba ingreso alguno, y tampoco que ha tenido una merma de los supuestos ingresos que percibía, y en sentido contrario, lo que si se encuentra fehacientemente probado, es que la demandante es beneficiaria a través de un particular cotizante en el sistema de salud, es decir que no cotiza ningún rubro obligatorio dentro del sistema de la seguridad social, por ser beneficiaria, tal y como se observa en el pantallazo aportado del ADRES, pero a su conveniencia aporta a este proceso una certificación que no podrá ser tenida como soporte de ingresos puesto que no es el documento idóneo para ello, y tampoco cumple con los requisitos para tenerse en cuenta como certificación de ingresos, aunque este no es el punto en discusión, pues el mismo radica en que una mera certificación no puede contradecir la información contenida en el registro público ADRES.

En ese orden de ideas no se ha demostrado ningún tipo de perjuicio que, que implique un lucro cesante futuro, Maxime cuando además de la información contenida en el ADRES, existe una confesión de la demandante en la entrevista del dictamen de PCL realizado por la junta regional de calificación de pérdida de la capacidad laboral, en la que la misma demandante manifiesta dedicarse al HOGAR.

Al respecto en varias oportunidades ha reiterado la corte:

"...Lo anterior pone de presente la fragilidad antes advertida, pues conforme a la aseveración de la contadora, lo pagado al ahora fallecido en tales anualidades estaría en el orden de \$1.6000.000, \$2.000.000 y \$4.500.000, suma esta última perteneciente a la fracción de 2003, habida cuenta que su deceso se produjo en el mes de junio; por tanto, no era viable certificarse todo el año, como aquella procedió.

En consecuencia y porque debiendo hacerlo, tampoco allegó soporte alguno de donde extrajo tales montos, no se atenderá la certificación expedida por la citada contadora, para la liquidación del lucro cesante, pues por sí, dicho escrito no prueba los ingresos.



Si bien el profesional de la contaduría ha sido legalmente facultado para «*dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general*<sup>1</sup>», esa autorización no puede concebirse ilimitada, sino supeditada a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Por ello, cuando de certificaciones relacionadas con hechos económicos de personas no comerciantes se trata, así éstas no tengan la obligación legal de llevar contabilidad, tales atestaciones no pueden fundarse en simples afirmaciones de quien las expide; deben contener algún grado de detalle que reflejen fielmente el origen de su contenido, esto es, de los datos, hechos o circunstancias cuya demostración se pretende.

El mencionado experto, como profesional de las ciencias contables, se halla en condiciones de señalar y en caso de ser requerido por una autoridad, en el deber de allegar los soportes que ratifiquen las aseveraciones vertidas en sus certificaciones.

Los riesgos sociales que conlleva el ejercicio de la potestad fedataria otorgada por el Estado al contador público, le imponen el otorgamiento de aquéllas, previa investigación, observación, interrogación y confirmación de los datos plasmados en ellas.

Respecto de esta temática, la Junta Central de Contadores, en la Circular Externa 44 de 10 de noviembre de 2005, publicada en el diario Oficial nº 46.114 del 6 de diciembre de dicho año, precisó:

*(...) considerando que no todas las personas están obligadas a llevar contabilidad, ante la posibilidad que en desarrollo de sus actividades económicas requieran para propósitos diversos la presentación de su información financiera, los contadores públicos llamados a suscribir las certificaciones de ingresos o reportes contables de las mismas, deben prepararlos de manera clara, precisa y ceñidos a la verdad, conforme se encuentra señalado en el artículo 69 de la Ley 43 de 1990, soportados en documentos idóneos donde se demuestre la realidad económica y/o los ingresos de estas personas. En este caso, el profesional de la contaduría pública indicará las fuentes soportes de sus afirmaciones, conservando copia de las mismas, que le sirvan para rendir explicaciones posteriores a su cliente, o cuando sean requeridos por la autoridad competente. Así mismo, el contador público que suscriba los certificados de ingresos y/o reportes contables, deberá indicar el alcance de los mismos.*

---

<sup>1</sup> Artículo 1º de la Ley 43 de 1990.





Por ello, la valoración de las certificaciones provenientes de esta clase de profesionales, debe realizarse de acuerdo con la sana crítica, principio en virtud del cual, el sentenciador goza de facultad para analizarlas junto con los elementos soportantes de su expedición y, de no hallarlas bien fundamentadas, puede separarse de ellas, toda vez que su eficacia e idoneidad, determinarán el alcance probatorio.

Como en este caso, la contadora del abogado Pablo Edgar Galeano Calderón no allegó ningún soporte de su certificación y éste no lo constituye el incompleto balance de prueba antes referido e igualmente carente de sustento, se reitera, lo por ella certificado respecto de los ingresos del señor Cantillo Rueda, no será acogido por la Sala para calcular el lucro cesante cuyo resarcimiento se reclama.

8.6. Lo anterior evidencia la falta de acreditación del citado componente indemnizatorio, toda vez que ni con los aludidos medios probatorios, ni con los restantes recaudados se pudo dilucidar cuál era en realidad, el ingreso mensual del esposo y padre de los accionantes, menos si se tiene en cuenta que previamente a su muerte no cotizaba para pensión, pues si bien lo hizo con el Instituto de Seguro Social en septiembre de 1995 con un IBC de \$118.933 y en abril de 1997 con un IBC de \$350.000 (fls. 55-56 c.2), de allí no se desprende el ingreso percibido en la época de su deceso. Tampoco puede obtenerse aquél de los aportes al SGSSS, puesto que la cotizante era su esposa y él, su beneficiario (fls. 62-63).

8.7. El resarcimiento del daño, en su modalidad de lucro cesante y más aún, tratándose del calificado como «*futuro*», se reitera, resulta viable en cuanto el expediente registre prueba concluyente y demostrativa de la verdadera entidad y extensión cuantitativa del mismo. En caso contrario, se impone *«rechazar por principio conclusiones dudosas o contingentes acerca de las ganancias que se dejaron de obtener apoyadas tales conclusiones en simples esperanzas, expresadas estas en ilusorios cálculos que no pasan de ser especulación teórica, y no en probabilidades objetivas demostradas con el rigor debido»* (CSJ SC11575-2015, Rad. 2006-00514-01).

8.8. No obstante lo anterior, como el perjuicio en todo caso se produjo, según quedó establecido, tanto en el fallo de casación, como en éste, esa circunstancia clama la reparación del mismo; todo lo cual, conlleva a la negación de las defensas denominadas *«ausencia de perjuicios»*, planteada por la convocada EPS Famisanar Ltda.; e *«inexistencia de daño, y ausencia de perjuicios»*, propuestas por la Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio.

Como adicionalmente se informa que la víctima ejercía actividades lícitas, las cuales, con seguridad le representaban alguna retribución, entonces, la falta de prueba concerniente a sus ingresos, no puede ser obstáculo para otorgar la indemnización pretendida por concepto de





lucro cesante; más bien, su negación se tornaría injusta e inequitativa, al estar acreditado el daño y el llamado a responder. Por tanto, en desarrollo de lo previsto en los artículos 230 de la Carta Política, 16 de la Ley 446 de 1998 y el principio de reparación integral, se impone acudir a los criterios auxiliares de la actividad judicial, dentro de ellos la equidad, la doctrina y la jurisprudencia.

Así lo ha concebido esta Corporación entre otros, en fallo CSJ SC 6 ago. 2009, Rad. 1994-01268-01, cuando expuso:

*Evidentemente, en aquellos casos en los que, a raíz de las peculiaridades propias que este ofrece, se carece de la prueba directa que permita establecer, sin mayores tropiezos, la respectiva remuneración pecuniaria -por ejemplo, cuando se tiene certeza de que la víctima ejercía actividades lícitas lucrativas, no en desarrollo de una relación laboral o de una contratación semejante sino de una gestión independiente-, como lo ha dicho la Corte, se tornaría inviable sostener, a rajatabla, que la víctima 'no las hubiera realizado, o que no se causó o percibió la respectiva contraprestación'; es claro 'que resultaría abiertamente contrario a la equidad que -por las resaltadas dificultades de tipo probatorio- se negara a los afectados la indemnización a que ciertamente tienen derecho de conformidad con las normas que regulan el tema, contenidas, principalmente, en los artículos 1613, 2341, 2343 y 2356 del Código Civil'; desde luego que 'hay casos en que sería injusto no concretar el valor de la indemnización so pretexto de que a pesar de estar demostrada la existencia del daño, su cuantificación no ha sido posible, pues, ante esta circunstancia, el juez... ha de acceder a criterios de equidad que le impiden soslayar los derechos de las víctimas' (...).*

De esta excepción me pronunciare en el momento procesal oportuno, pero desde ya solicito se declare probada.

## **5.) COBRO DE LO NO DEBIDO Y ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA**

Encuentra su fundamento legal la presente excepción, en primer lugar, en el hecho de que el valor que en algún momento se establezca como pago por concepto de indemnización debe ser acorde con la realidad y no por suma que supere los perjuicios supuestamente ocasionados. En tal sentido téngase en cuenta lo que ha dicho la propia Corte Constitucional al respecto en la sentencia C-228 de abril 3 de 2002, en la que estableció **"..la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a la verdad y a la justicia, con lo cual la acción civil no cuenta con una finalidad exclusivamente pecuniaria"**. (Subrayas y negrillas fuera de texto).



ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

---

En efecto, sabido es que la perdida debe corresponder a la categoría del daño ocasionado, en el presente evento de los supuestos perjuicios materiales y morales sufridos por las demandantes no debe olvidarse que legal, doctrinaria y jurisprudencialmente se ha establecido que el reclamo no puede ser fuente de enriquecimiento y se debe demostrar el perjuicio sufrido. En el presente evento, además de los argumentos expuestos al tratarse las anteriores excepciones, los cuales solicito sean tenidos en cuenta también para esta excepción.

En segundo lugar, es del caso hacer ver que cuando se predica del daño moral que debe ser cierto para que haya lugar a su reparación, se alude sin duda a la necesidad de que obre la prueba, tanto de su existencia como de la intensidad que lo resalta, prueba que en la mayor parte de los supuestos depende en últimas de la correcta aplicación, no de presunciones legales, que en éste ámbito la verdad sea dicha el ordenamiento positivo no consagra en parte alguna, sino de simples presunciones de hombre cuyo papel es aquí de gran importancia.

Es más, en un eventual caso de que llegaren a ser condenados los demandados al reconocimiento y pago de perjuicios de cualquier índole, sin que ello indique aceptación de responsabilidad alguna por parte de mi defendido, los mismos deberán corresponder a la categoría del daño ocasionado, y de los hechos de la demanda, tal como se dijo anteriormente.

Por regla general, a la parte interesada le corresponde probar los hechos que alega a su favor para la consecución de un derecho. Es este postulado un principio procesal conocido como '*onus prodandi, incumbit actori*' y que de manera expresa se encuentra previsto en el artículo 167 del C.G.P. Correlativo a la carga del demandante, está así mismo el deber del demandado de probar los hechos que sustentan su defensa, obligación que igualmente se recoge en el aforismo '*reus, in excipiendo, fit actor*'. A fin de suplir estas cargas las partes cuentan con diversos medios de prueba, los cuales de manera enunciativa, se encuentran determinados en el artículo 165 del Código General del Proceso.

Ahora bien, en el juez radica la facultad discrecional de determinar el monto a reconocer cuando se trata de perjuicios morales. Discrecionalidad que está regida: a) bajo el entendido de que la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, más no de restitución, ni de reparación; b) por la aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 ; c) por el deber de estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso respecto de perjuicio y su intensidad y por el d) deber de estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad.



De esta excepción me pronunciare en el momento procesal oportuno, pero desde yo solicito al señor Juez se declare probada.

## **6.) ROMPIMIENTO DEL NEXO CAUSAL**

Se fundamenta la presente excepción, en el hecho de que es de imperativo mandato legal que quien demande el reconocimiento y pago de una determinada indemnización ha de comprobar, de manera cierta y fehaciente, el daño padecido, el hecho intencional o culposo del demandado, y la relación de causalidad entre el proceder o la omisión negligente de este y los perjuicios sufridos. En el presente evento, si bien puede hablarse de la existencia de un daño, no se ha establecido que haya ocurrido un hecho, y de haber ocurrido dicho hecho, no se ha establecido que el hecho sea intencional o culposo por parte de mi representada en la producción del mismo, pues existe el rompimiento del nexo de causalidad por ausencia de culpa, toda vez que existen excluyentes como CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA, HECHO DE UN TERCERO.

Concordante con lo anterior, es del caso manifestar que el carácter directo del daño no es un problema del daño sino de imputación, pues el carácter directo del daño supone el nexo de causalidad que ha de existir entre el daño y el autor y toda relación entre el daño y el autor es un sistema de imputación y de causalidad.

De manera que la responsabilidad civil supone siempre una relación entre dos sujetos ya sea de tipo contractual o extracontractual, de los cuales una ha causado un daño y otro lo ha sufrido. La responsabilidad civil deriva entonces de esa relación de hecho, vale decir de la obligación del autor del daño de reparar el perjuicio ocasionado, por consiguiente, para que nazca la obligación de indemnización debe estar plenamente demostrado el nexo de causalidad entre el sujeto que causa el daño y el que lo ha sufrido.

En relación al tema de la estructuración de la responsabilidad civil la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, entre muchos pronunciamientos ha dicho: *"La prosperidad de la acción de responsabilidad contractual depende de la demostración, en primer término, de la celebración por las partes del contrato a que se refiere la misma y, en segunda lugar, de los elementos que son propios de aquella, a saber: el incumplimiento de la convención por la persona a quien se demanda; la producción para el actor de un daño cierto y real; y, finalmente, que entre uno y otro de tales elementos medie un nexo de causalidad, es decir, que el perjuicio cuya reparación se persigue sea consecuencia directa de la conducta anticontractual reprochada al demandado."* (Expediente No. 5659 de marzo nueve (9) de dos mil uno (2001), magistrado ponente Dr. NICOLAS BECHARA SIMANCAS).



ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

---

Lo anterior conduce a la innegable conclusión de que en el presente caso no existe daño indemnizable a la luz de la legislación imperante, conllevando ello a que tampoco exista culpa alguna atribuible a mi representada en el accidente y los perjuicios materiales y extrapatrimoniales que dice haber sufrido el demandante, rompiéndose el obligatorio nexo causal que debe darse entre esta y el supuesto daño irrogado a la misma. Y es que en su sentido más lato, la culpa se estructura a partir de una conducta activa (acción) o pasiva (omisión) con visos de imprudencia, impericia o negligencia, de manera que conforme a lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso al actor corresponde la carga de demostrar la incursión de los demandados en una conducta de tales características, so pena de que por la insatisfacción de dicha carga su acción no prospere, como ocurre en el presente evento.

Y es que efectivamente el nexo de causalidad se rompe, pues no existe prueba alguna de la ocurrencia de un hecho en el cual se vea involucrada mi representada, y por consiguiente de los demás demandados.

De esta excepción me pronunciare en el momento procesal oportuno, pero desde ya solicito al señor Juez se declare probada.

### **EXAGERADA PRETENSION EN DAÑOS EXTRAPATRIMONIALES DE ACUERDO A ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES**

El daño moral comporta el menoscabo a la dimensión afectiva, los sentimientos, el amor en la familia, la parte social, los atentados contra el honor, la reputación, las consideraciones sociales; por lo mismo, no puede establecerse a partir de métodos matemáticos como acontece con los perjuicios materiales. Varios criterios han desarrollado la jurisprudencia para calcularlos:

«Dada la inasible naturaleza del daño no patrimonial, debe buscarse, “con ayuda del buen sentido (...) y con apoyo en hechos probados que den cuenta de las circunstancias personales de los damnificados reclamantes, una relativa satisfacción para estos últimos proporcionándoles de ordinario una suma de dinero que no deje incólume la agresión, pero que tampoco represente un lucro injustificado que acabe por desvirtuar la función institucional que prestaciones de ese linaje están llamadas a cumplir” (sentencia de 25 de noviembre de 1992. Exp. 3382); consideraciones éstas que aun cuando se expresaron con relación al daño moral, resultan perfectamente aplicables a toda clase de perjuicio extra-patrimonial, incluido el daño a la vida de relación.

A diferencia de la estimación de los perjuicios patrimoniales, para los que existen en la mayoría de las ocasiones datos objetivos que sirven de



apoyo para su cuantificación, el perjuicio extrapatrimonial ha estado y seguirá estando confiado al discreto arbitrio de los funcionarios judiciales, lo que no **“equivale a abrirle paso a antojadizas intuiciones pergeñadas a la carrera para sustentar condenas excesivas, sino que a dichos funcionarios les impone el deber de actuar con prudencia, evitando en primer lugar servirse de pautas apriorísticas...”**. (Resaltado fuera de texto)

No pueden, por tanto, fijarse o establecerse parámetros generales que en forma mecánica se apliquen a la valoración de tal clase de perjuicio, pues cada caso concreto ofrece particularidades que deberán ser apreciadas por el juez al momento de hacer la correspondiente tasación»<sup>7</sup>.

Ahora bien, corresponde señalar que los criterios para la determinación del perjuicio moral subjetivo vienen dados por la naturaleza del daño, las condiciones personales de quien lo ha sufrido y las pautas que ha tenido en cuenta la jurisprudencia en casos análogos (subrayas y negrillas mías), en orden a adoptar decisiones equitativas.

Sobre esto último, oportuno es precisar que la Sala de Casación Civil en CSJ SP 6 mayo 1998 rad. 4972, indicó que no se ha pretendido imponer topes máximos a la compensación de los perjuicios morales subjetivos, sino pautas que faciliten la resolución de los casos concretos. Así lo indicó la Corporación:

Acerca de tal aspecto y en vista de la ausencia de un explícito mandato legal al respecto, la Corte con apoyo en la misión unificadora que por ley le corresponde, viene, de tiempo en tiempo y desde algunos años, señalando unos topes máximos de dinero dentro de los cuales es, a juicio de aquella, admisible que el juez ejerza prudente arbitrio al estimar el monto de la competencia por el perjuicio moral.

(...) Ahora bien, los topes que de manera periódica y por vía jurisprudencial ha venido indicando la Corte, no son, en modo alguno de obligatorio acatamiento para los falladores de las instancias, pues, como legalmente consta, los jueces les está vedado proveer por vía de disposición general o reglamentaria (C.C art. 17). Estos topes, dícese de nuevo, no representan otra cosa que una guía para las jurisdicciones inferiores, máxime cuando son estas las que deben ceñirse a su prudente juicio cuando tasan los perjuicios morales (Cas 28 febrero 1990)

(...) como ya se dijo, esa guía, esa pauta, no son más que eso, y jamás han tenido, y no pueden tener por mandato legal de carácter obligatorio.

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO, Magistrado Ponente.SP6029-2017, Radicación: 36784, Aprobado Acta N. 124, Bogotá, D. C., tres (03) de mayo de dos mil diecisiete (2017).





ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

---

En cuanto concierne al «daño moral», al ser de la órbita subjetiva, íntima o interna de la persona, pero exteriorizado por el dolor, la aflicción, el decaimiento anímico, el pesar, la congoja, la angustia, la desolación, la sensación de impotencia u otros signos expresivos, su reconocimiento económico tiene una función, en esencia, satisfactoria y no reparatoria en toda su magnitud, pues si bien los medios de persuasión pueden demostrar su existencia, no lograrán comprender una dimensión patrimonial y menos exacta, frente a la lesión de quien la sufre.

Sin embargo, para su valoración se ha considerado apropiado dejarlo a cargo del fallador, conforme al arbitrio judicial ponderado, teniendo en cuenta las condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos, la situación o posición, tanto de la víctima, como de los perjudicados, el grado de cercanía entre la víctima y quienes buscan la reparación de esa lesión, la intensidad de ésta y los demás aspectos subjetivos antes señalados.

En relación con el detrimento moral, la Sala en CSJ SC 28 de mayo de 2012, radicación 2002-00101-01, señaló:

*Tal perjuicio, como se sabe, es una especie de daño que incide en el ámbito particular de la personalidad humana en cuanto toca sentimientos íntimos tales como la pesadumbre, la aflicción, la soledad, la sensación de abandono o de impotencia que el evento dañoso le hubiese ocasionado a quien lo padece, circunstancia que, si bien dificulta su determinación, no puede aparezcar el dejar de lado la empresa de tasarlos, tarea que, por lo demás, deberá desplegarse teniendo en cuenta que las vivencias internas causadas por el daño, varían de la misma forma como cambia la individualidad espiritual del hombre, de modo que ciertos incidentes que a una determinada persona pueden conllevar hondo sufrimiento, hasta el extremo de ocasionarle severos trastornos emocionales, a otras personas, en cambio, puede afectarlos en menor grado. 'Aparte de estos factores de índole interna, dice la Corte, que pertenecen por completo al dominio de la psicología, y cuya comprobación exacta escapa a las reglas procesales, existen otros elementos de carácter externo, como son los que integran el hecho antijurídico que provoca la obligación de indemnizar, las circunstancias y el medio en que el acontecimiento se manifiesta, las condiciones sociales y económicas de los protagonistas y, en fin, todos los demás que se conjugan para darle una individualidad propia a la relación procesal y hacer más compleja y difícil la tarea de estimar con la exactitud que fuera de desearse la equivalencia entre el daño sufrido y la indemnización reclamada ...' (...)'.*

Bajo esos presupuestos, por cuanto sólo quien padece ese dolor subjetivo conoce la intensidad con que se produjo, tal sufrimiento no puede ser comunicado en su verdadera dimensión a nadie más; no



ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

---

obstante, como tal perjuicio no puede quedar sin resarcimiento, es el propio juez quien debe regularlos.

En ese orden de ideas, en el ejercicio del arbitrium judicis orientado a fijar el quantum en dinero del resarcimiento del perjuicio moral, se tendrán en cuenta, además de las orientaciones jurisprudenciales que han sido citadas, las circunstancias personales de la víctima; su grado de parentesco con los demandantes; la cercanía que había entre ellos; y la forma siniestra en que tuvo lugar el deceso.

Y, en cuanto al monto de dicha reparación, recientemente, la Corte, en Sentencia CSJ SC13925-2016, radicación 2005-00174-01, lo fijó en \$ 60.000.000. Al efecto, expuso:

*Siguiendo las pautas reseñadas, se tasarán los perjuicios morales sufridos por los demandantes en la suma de \$ 60'000.000 para cada uno de los padres; \$ 60'000.000 para el esposo; y \$ 60'000.000 para cada uno de los hijos.*

*El anterior monto se estima razonable, puesto que esta Sala, en circunstancias fácticas similares, ha condenado en el pasado al pago de \$ 53.000.000 (SC nov. 17/2011, exp. 1999-533), y \$ 55.000.000 (SC jul. 9/2012, exp. 2002-101-01).*

*De manera que es apenas justificable que en cuatro años, el monto de los referidos perjuicios sufra un incremento o ajuste moderado. Al respecto nuestra jurisprudencia tiene establecido:*

*Adviértase que no se trata de aplicar corrección o actualización monetaria a las cifras señaladas por la Corte de antaño, por cuanto el daño moral no admite indexación monetaria, sino de ajustar el monto de la reparación de esta lesión, como parámetro de referencia o guía a los funcionarios judiciales, a las exigencias de la época contemporánea...' (SC nov. 17/2011, exp. 1999-533).*

*De acuerdo con los mencionados lineamientos, en este caso, es incuestionable el menoscabo moral experimentado por los demandantes, como lo refirieron los declarantes, pues en el caso de la cónyuge sobreviviente, el intempestivo deceso de su esposo, le produjo trastorno en su estado de ánimo, aflicción, desolación, angustia al quedar desprovista, no solo del afecto de su esposo, sino de su respaldo en todos los órdenes, pues además surgió para ella la responsabilidad de asumir íntegramente la obligación alimentaria, la formación, cuidado y sostenimiento de sus hijos y, en general, del hogar, situación generadora de angustia, pues hasta entonces, ese cometido venía siendo compartido con él.*

*Sus hijos, igualmente, al verse privados, entre otros privilegios, del afecto, compañía, protección, formación, orientación, cuidados,*





ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

---

*representación académica, familiar y social en general, de su padre, sufrieron el detrimento moral, lo cual clama su resarcimiento, para de esa forma satisfacer en algo esa contusión moral.*

*Así las cosas, con observancia de las pautas jurisprudenciales de esta corporación, se calculará esa variedad de perjuicio sufrido por los demandantes, en la suma de \$ 60.000.000, para cada uno.*

Inclusive se han dado pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia por valores inferiores a los anotados

*Radicación No. 11001-02-03-000-2015-0134-00 Corte Suprema de Justicia.*

*"(...) como se puede observar la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en lo atinente a la cuantificación de los perjuicios de orden moral, ha mantenido un rango entre los siete y veinte millones de pesos, atendiendo a la intensidad del daño moral y a la prueba del mismo; razón por la que esta Sala acogiendo el criterio adoptado por nuestra máxima corporación y a que la parte activa de la Litis no arrimo medio probatorio que acreditara, la intensidad del daño moral sufrido por cada uno de los demandantes, estima los perjuicios morales ocasionados a los hijos y madre de Dora Alicia Gallardo Calvo, en la suma equivalente a 16 salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, que a la fecha de la presente providencia equivalen a la suma de \$10.309.600; el valor de los perjuicios morales para Alirio Astaiza, se tasan en la suma equivalente a 11 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presente providencia equivalen a \$7.087.850...."*

A la luz de la anterior jurisprudencia referida, se encuentra que la Honorable Corte Suprema de Justicia, ha indicado que los perjuicios morales que se llegasen a sufrir, se tasaran dentro del arbitrio del juez, teniendo como parámetros un tope en caso muerte de una suma de veinte millones de pesos (\$20.000.000).

Otros pronunciamientos:

*"...8.2.1. En tratándose de esta clase de daño, propio es notar que él puede materializarse, de un lado, en el ámbito puramente interior de la víctima, ocasionándole dolor, frustración, impotencia o hiriendo su autoestima, entre muchas hipótesis más; y, de otro, en el campo de su vida exterior, restringiendo su interacción con las demás personas, con las cosas del mundo y/o, en general, con el entorno.*

*8.2.2. Sobre los perjuicios en precedencia señalados, la Corte tiene dicho que aquellos "se identifica[n] con la noción de daño moral, que incide o se proyecta en la esfera afectiva o interior de la persona, al generar sensaciones de aflicción, congoja, desilusión, tristeza, pesar,*



*etc.”; que los otros vienen a ser “el denominado daño a la vida de relación, que se traduce en afectaciones que inciden en forma negativa sobre*

*[la] vida exterior, concretamente, alrededor de [la] ‘... actividad social no patrimonial ...’ (...); y que si bien es verdad que esas “categorías, (...) recaen sobre intereses, bienes o derechos que por su naturaleza extrapatrimonial o inmaterial resultan inasibles e inconmensurables, en todo caso, ello no impide que, como medida de satisfacción, el ordenamiento jurídico permita el reconocimiento de una determinada cantidad de dinero, a través del llamado arbitrium judicis, encaminada, desde luego, más que a obtener una reparación económica exacta, a mitigar, paliar o atenuar, en la medida de lo posible, las secuelas y padecimientos que afectan a la víctima” (CSJ, SC del 13 de mayo de 2008, Rad. n.º 1997-09327-01).*

8.3.3. De lo expuesto, al tiempo, se infiere, para decirlo con extrema brevedad, que el nombrado actor, durante toda su vida, ha estado y estará, acompañado de sentimientos de tristeza, pesadumbre, impotencia, carencia y de inferioridad, por solo mencionar algunos, a título de ejemplo.

8.3.4. Así las cosas, estima la Corte que en este caso particular, para indemnizar el perjuicio moral, debe fijarse una suma muy próxima al máximo que tiene definido como tal, que ascenderá a la cantidad de \$50.000.000.00.

8.3.5. De ese valor, solamente se impondrá a las accionadas el 70% (\$35.000.000.00), que es el porcentaje en el que se fijó su responsabilidad....”

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL, ALVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO, Magistrado ponente, SC16690-2016, Radicación n.º 11001-31-03-008-2000-00196-01, (Aprobado en sesión de 10 de mayo de 2016), Bogotá, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).-

También el CONSEJO DE ESTADO, se pronunció sobre el tema:

*“... A fin de que en lo sucesivo, se indemnicen de manera semejante los perjuicios morales reclamados por la muerte de una persona, como en el presente caso, la Sala, a manera de complemento de lo decidido en la sentencia mencionada en el párrafo que antecede, decide unificar su jurisprudencia sobre el particular, a partir del establecimiento de cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño o causante y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas; así:*



*Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno – filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.*

*Nivel 2. Se refiere a la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (hermanos, abuelos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.*

*Nivel 3. Abarca la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.*

*Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.*

*Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.*

*La siguiente tabla recoge lo expuesto:*

<b>REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE</b>					
	<b>NIVEL 1</b>	<b>NIVEL 2</b>	<b>NIVEL 3</b>	<b>NIVEL 4</b>	<b>NIVEL 5</b>
<i>Regla general en el caso de muerte</i>	<i>Relación afectiva conyugal y paterno – filial</i>	<i>Relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil</i>	<i>Relación afectiva del 3er de consanguinidad civil</i>	<i>Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil.</i>	<i>Relación afectiva no familiar (terceros damnificados)</i>
<i>Porcentaje</i>	100%	50%	35%	25%	15%
<i>Equivalencia en salarios mínimos</i>	100	50	35	25	15

*Para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se*



ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

---

*requerirá la prueba de la relación afectiva. Para el nivel 5, deberá ser probada la relación afectiva.*

**En cuanto a los daños a la vida de relación.**

*" ... Dicho con otras palabras, esta especie de perjuicio puede evidenciarse en la disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la pérdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como también en la privación que padece el afectado para desplegar las más elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad. Podría decirse que quien sufre un daño a la vida de relación se ve forzado a llevar una existencia en condiciones más complicadas o exigentes que los demás, como quiera que debe enfrentar circunstancias y barreras anormales, a causa de las cuales hasta lo más simple se puede tornar difícil. Por lo mismo, recalca la Corte, la calidad de vida se ve reducida, al paso que*

*las posibilidades, opciones, proyectos y aspiraciones desaparecen definitivamente o su nivel de dificultad aumenta considerablemente. Es así como de un momento a otro la víctima encontrará injustificadamente en su camino obstáculos, preocupaciones y vicisitudes que antes no tenía, lo que cierra o entorpece su acceso a la cultura, al placer, a la comunicación, al entretenimiento, a la ciencia, al desarrollo y, en fin, a todo lo que supone una existencia normal, con las correlativas insatisfacciones, frustraciones y profundo malestar (ibídem)..."*

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL, ALVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO, Magistrado ponente, SC16690-2016, Radicación n.º 11001-31-03-008-2000-00196-01, (Aprobado en sesión de 10 de mayo de 2016), Bogotá, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).-**

Otros pronunciamientos:

En sentencia correspondiente al Expediente No. 11001-3103-006-1997-09327-01 del 13 de Mayo de 2008 del Magistrado Ponente Cesar Julio Valencia Copete, reguló por daño moral para un parapléjico de \$5.000.000.

**INNOMINADA**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 282 del C. G. del Proceso, antes 306 del C. de P. C., alego a favor de mis defendidas cualquier hecho que constituya una excepción, la que deberá ser reconocida y declarada de oficio por el Señor Juez de conocimiento en la sentencia.



ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

---

### **PRUEBAS SOLICITADAS**

Con el fin de probar los hechos que fundamentan estas excepciones, solicito al señor Juez ordenar, admitir y practicar las siguientes pruebas:

#### **a. INTERROGATORIO DE PARTE**

Sírvase señor Juez citar y hacer comparecer a su despacho a la demandante Isabel Pardo Trochez, para que absuelvan interrogatorio de parte que en forma verbal o escrita se le hará, el día en que el despacho fije la diligencia y que versara sobre los hechos y pretensiones de la demanda, las excepciones propuestas por la suscrita y la indemnización de perjuicios que pretende. Se le puede notificar a la dirección aportada en la demanda.

Con esta prueba se pretende controvertir la responsabilidad y los perjuicios que se pretende, y su cuantía.

#### **b. RATIFICACION**

Solicito al señor Juez, de conformidad con los artículos 185 y 262 del código general del proceso, la ratificación de todos y cada uno de los documentos y facturas que la parte demandante pretenda hacer valer dentro del proceso, con la aclaración a que por la cercanía de la prueba, es a esa parte a quien le corresponde la citación del tercero quien emitió el documento privado.

#### **c. OFICIOS**

Sírvase señor Juez Oficiar al Ministerio de Salud y de la protección social, con el fin de que certifiquen si la demandante ISABEL PARDO TROCHEZ identificada con la cedula de ciudadanía No. c.c. 31.267.392, ha estado vinculadas al régimen de salud en el territorio nacional, durante que vigencias, bajo qué calidad, en que entidad promotora. Con esta prueba se pretende demostrar que la parte demandante para la fecha de los hechos no se encontraba generando ingresos ya que era afiliado al régimen de salud en calidad de beneficiaria de un tercero, a contrario de lo que intenta hacer creer a su señoría y por lo tanto no se encontraba trabajando.

No obstante, la presente solicitud probatoria, se informa al despacho que en el día de hoy 22 de junio de 2022, se presentó solicitud mediante petición en la página del Ministerio de Salud y de la Seguridad Social.

#### **d. DOCUMENTALES**



ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

Sírvase señor Juez tener como prueba documental el derecho de petición radicado ante el Ministerio de Salud en el cual se le solicita la información sobre si las demandantes se encuentran o no adscritas al régimen de la seguridad social, desde que fechas, etc.

Sírvase señor Juez tener como prueba, la información contenida en la página de ADRES relativa a la afiliación a la seguridad social de la demandante.

**e. SOLICITUD DE OTRAS PRUEBAS QUE SURJAN DE LAS QUE SE PRACTIQUEN DENTRO DEL EXPEDIENTE**

Respetuosamente le manifiesto al despacho que en el evento que de las pruebas solicitadas y practicadas en el expediente surjan otras pruebas que practicar, así lo solicitara el suscrito por lo que desde ya pido que el decreto y practica de pruebas futuras.

**DERECHO**

Son fundamentos de derecho, el artículo 96 y siguientes del CGP, así como todas las normas del CGP y c. c. que sean aplicables al presente caso.

**NOTIFICACIONES Y DIRECCIONES**

El demandado Cooperativa Especializada de Transportes COOMOEPAL LTDA, recibirá notificaciones en la Calle 5 No. 61-89 local 8 Centro Comercial Cañaveralejo de la ciudad Cali, correo electrónico coomoepalcali@gmail.com

La suscrita recibirá notificaciones en su despacho o en la Calle 5 No. 61-89 local 8 de la ciudad de Cali. E mail: [adriana\\_cardosodavila@hotmail.com](mailto:adriana_cardosodavila@hotmail.com) o al teléfono 3166905529.

El demandante y o sus apoderados en la dirección que obra en la respectiva demanda.

Del señor Juez,

**ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA**

Calle 9 No. 4-65 Oficina 204 Cali 3166905529  
e-mail: [adriana\\_cardosodavila@hotmail.com](mailto:adriana_cardosodavila@hotmail.com)





ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

---

**C. C. 66.834.931 de Cali**

**T. P. 84.379 del C. S. de la J.**

Santiago de Cali, junio 22 de 2022

**Señores**

**MINISTERIO DE SALUD Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

Ref. Petición de interés particular

Adriana Patricia Cardoso Davila, mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.834.931 expedida en Cali, abogada en ejercicio portadora de la tarjeta profesional de abogado No. 84.379 del Consejo Superior de la judicatura, en calidad de apoderada judicial de Cooperativa Especializada de Transportes COOMOEPAL, en ejercicio del **DERECHO DE PETICION**, amparado en el artículo 23 de la constitución nacional, de la manera más atenta y respetuosa presento ante ustedes, en su condición de autoridad competente; el siguiente escrito de petición con base en los siguientes hechos:

- 1.) La Cooperativa Especializada de Transportes COOMOEPAL para el día 10 de febrero de 2010, era la empresa afiliadora del vehículo de placas **YAP873**, el cual, al parecer se vio involucrado en accidente de tránsito ocurrido ese día, y en el cual supuestamente resultó lesionada la señora ISABEL PARDO TROCHEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.267.392.
- 2.) Consecuencia del accidente de tránsito antes mencionado, La Cooperativa Especializada de Transportes COOMOEPAL, fue vinculado a proceso civil, ante el juzgado Veintiocho Civil Municipal de Cali, bajo la radicación 7600140030282018-00021, en donde figura como demandante la señora: **ISABEL PARDO TROCHEZ**, mayor de edad, vecina de Buga, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.267.392.
- 3.) Dentro de los hechos de la demanda, se menciona que la señora ISABEL PARDO TROCHEZ, (lesionada), sufragaba unos ingresos mensuales, y con base en dichos ingresos se pretenden sumas por incapacidades y perjuicios materiales de lucro cesante entre otros.
- 4.) El código general del proceso en su artículo **167. CARGA DE LA PRUEBA**. Manifiesta que: Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
- 5.) El código general del proceso en el **ARTÍCULO 173. OPORTUNIDADES PROBATORIAS** manifiesta que:

*“Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código.*

*En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente.*

*Las pruebas practicadas por comisionado o de común acuerdo por las partes y los informes o documentos solicitados a otras entidades públicas o privadas, que lleguen antes de dictar sentencia, serán tenidas en cuenta para la decisión, previo el cumplimiento de los requisitos legales para su práctica y contradicción. Subrayado fuera del texto original.*

- 6.) Así las cosas, en calidad de representante de la parte demandada, y con el fin de ejercer el derecho a la defensa se hace necesario solicitar a esta entidad la información que se solicita en el acápite de petición y relacionada con la vinculación al régimen de la seguridad social de la demandante ISABEL PARDO TROCHEZ.

Conforme a los anteriores hechos, solicito con destino al Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Cali Valle radicación 7600140030282018-00021, proceso verbal de responsabilidad civil Contractual que adelanta ese despacho en contra de mi representada Cooperativa Especializada de Transportes COOMOEPAL, absolver los siguientes interrogantes:

### **PETICION**

1. Se informe al juzgado Veintiocho Civil Municipal de Cali Valle, si la señora ISABEL PARDO TROCHEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.267.392, se encontraba para el día 10 de febrero de 2010 afiliado al sistema de la seguridad social, en los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, y servicios sociales complementarios, desde que fecha se encontraba afiliado en cada sistema en que entidad de salud, pensión, riesgo laboral y servicios sociales complementarios, bajo que modalidad se encontraba afiliado en cada sistema, si era cotizante o beneficiario, si era beneficiario manifestar de que cotizante era beneficiario, si era cotizante manifestar si se encontraba afiliado como empleado o como independiente y quien era su empleador, cuál era el salario base de cotización, e igualmente se informe si actualmente se encuentra afiliado a los sistema de salud, pensiones, riesgos laborales, y servicios sociales complementarios, desde que fecha, bajo que modalidad.

Todo lo anterior con el objeto de lograr establecer la existencia o ausencia de responsabilidad de indemnizar los perjuicios pretendidos bajo la demanda indicada.

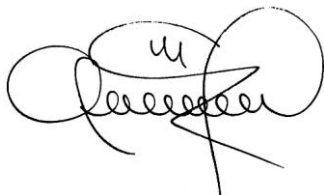
### **NOTIFICACIONES**

Favor dar respuesta al juzgado Veintiocho Civil Municipal de Cali, incluso si la entidad decide negarse a dar respuesta por la reserva de que goza la información solicitada, igualmente responder al correo electrónico: [j28cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j28cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co).

Mis datos de notificación: Carrera 108 No. 42-92 Apto 603 torre 3 de la ciudad de Cali, correo electrónico: [adriana\\_cardosodavila@hotmail.com](mailto:adriana_cardosodavila@hotmail.com).

Anexo: Copia del poder que demuestra la representación a la Cooperativa Especializada de Transportes COOMOEPAL, copia del pantallazo de la consulta de Ruaf a nombre del demandante ISABEL PARDO TROCHEZ, y auto admisorio de la demanda en contra de mi representado.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adriana', with a stylized flourish at the end.

**ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA**  
**CC. 66.834.931 EXPEDIDA EN CALI**  
**T.P. 84.379 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**



Radicado N°. 202242401342672  
2022 - 06 - 22 06:54:19 Folios: N/A (WEB) Anexos: 4  
Destino: 4240 G. GESTOR - Rem/D: ADRIANA PA CARDOSO  
Consulte el estado de su trámite en nuestra página web  
<https://orfeo.minsalud.gov.co/orfeo/consultaWebMinSalud/>  
Código de verificación: 9343a  
Página: 1 de 1

**CALI - VALLE DEL CAUCA , 22 de junio de 2022**

**Señores**  
**MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL**  
Ciudad

Asunto : AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL DE TERCEROS

Solicito informacion acerca de la afiliacion a la seguridad social de terceros

Se adjuntan los siguientes archivos:

1. 1655941984\_99474.pdf sha1sum: 84a879f949a242574bf62f67171183da035173ad
2. 1655941997\_92063.pdf sha1sum: fac47340134b9eff398ebaceddb51ad5fe8a9aef
3. 1655942028\_89475.pdf sha1sum: ff2c9a0bd2694931092c7cb035764d9b1488bff9
4. 1655942037\_51151.pdf sha1sum: f5aebf418bc398b2c42576928153e10dbb0bc129

Atentamente,

**ADRIANA PATRICIA CARDOSO**  
C.C. 66834931  
CARRERA 108 No. 42-92 APTO 603 TORRE 3 CALI, - VALLE DEL CAUCA.  
COLOMBIA  
Tel. 316695529  
[adriana\\_cardosodavila@hotmail.com](mailto:adriana_cardosodavila@hotmail.com)  
Medio de notificación: Correo Electronico.

## ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

### Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	31267392
NOMBRES	ISABEL
APELLIDOS	PARDO TROCHEZ
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	VALLE
MUNICIPIO	SANTIAGO DE CALI

### Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	EPS SURAMERICANA S.A.	CONTRIBUTIVO	29/11/1995	31/12/2999	BENEFICIARIO

Fecha de Impresión: 06/22/2022 18:47:06 Estación de origen: 192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolución 4622 de 2016.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

**Esta información se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.**

Si usted encuentra una inconsistencia en la información publicada en ésta página, por favor remítase a la EPS en la cual se encuentre afiliado y solicite la corrección de la información inconsistente sobre su afiliación. Una vez realizada esta actividad, la EPS debe remitir la novedad correspondiente a la ADRES, conforme lo establece la normatividad vigente.





ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

Señores

JUZGADO VEINTIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE CALI

E.

S.

D.

**REF. PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL**  
**RADICACION No. 76-001-40-03-028-2018-00021-00**  
**DEMANDANTE ISABEL PARDO TROCHEZ**  
**DEMANDADO COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTES**  
**COOMOEPAL Y OTROS**

**ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA**, mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.834.931 de Cali, abogada en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional No. 84.379 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en el presente proceso en calidad de apoderada judicial de la Cooperativa Especializada de Transportes COOMOEPAL, identificada con el NIT 890303081-7, según poder conferido por su representante legal, la Dra. Ana Milena Duque Ricaurte mayor de edad, vecina de Cali identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.467.781 con presentación personal, el cual se aporta a este escrito, con el debido respeto me dirijo usted, para manifestarle que dentro del término legal estoy haciendo uso de la solicitud de LLAMAMIENTO EN GARANTIA a la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, con base en los siguientes:

### **HECHOS**

1. El vehículo de placas **YAP873**, se encontraba amparado con la póliza de Responsabilidad Civil Contractual No. 430-4-994000000014, y la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 430-40-994000002495, expedidas por la compañía aseguradora ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, con vigencia desde el día 07 de DICIEMBRE de 2009, hasta el 07 de diciembre de 2010, dentro de las cuales se encuentran amparadas las coberturas de lesiones a pasajeros.
2. El día 10 de febrero de 2010, según los hechos de la demanda principal, ocurrió el siniestro objeto de esta demanda, en donde al parecer resultó lesionada la señora ISABEL PARDO TROCHEZ, y en el cual se encuentra involucrado el vehículo de placas YAP873.
3. Al momento de ocurrencia del hecho que se hizo alusión en el numeral anterior, el vehículo de placas YAP873 se encontraba asegurado con la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, amparado con la cobertura de responsabilidad civil Contractual, mediante la póliza mencionada en el numeral 1 de este escrito.

Con base en los anteriores hechos, presento al honorable señor Juez, el siguiente:



ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

---

### **PRETENSION**

Se llame en garantía a la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA S.A., identificada con el Nit No. 860524654-6, persona jurídica con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D. C., y cuyo representante legal judicial es la Dra. María Yasmith Hernández Montoya, identificado con la cedula de ciudadanía No. 38.264.817, o quien haga sus veces, para que con fundamento en la póliza contratada responda con los valores pactados en la misma.

### **SOLICITUD DE PRUEBAS**

#### **DOCUMENTALES**

1. Sírvase señor Juez tener como prueba las pólizas de Responsabilidad Civil Contractual No. 430-4-994000000014, y la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 430-40-994000002495, expedidas por la compañía aseguradora ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, con vigencia desde el día 07 de DICIEMBRE de 2009, hasta el 07 de diciembre de 2010, dentro de las cuales se encuentran amparadas la cobertura de lesiones a pasajeros, contratada para el vehículo de placas **YAP873**, y en donde el tomador es la empresa Cooperativa especializada de motoristas COOMOEPAL..
2. Sírvase señor Juez tener como prueba el certificado de Existencia y representación de la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA S.A., expedida por la Superintendencia financiera y que se aporta a este escrito.

### **DERECHO**

Son fundamentos de derecho, todas las normas de los artículos 64 y siguientes del CGP, artículos 82 y siguientes del CGP y demás normas concordantes y aplicables al caso del CCC y del CGP.

### **NOTIFICACIONES Y DIRECCIONES**

El Llamante en garantía, Coomoepal, recibirá notificaciones en la Calle 5 No. 61-89 Local 8 de la ciudad de Cali. E mail: [coomoepalcali@gmail.com](mailto:coomoepalcali@gmail.com).

La suscrita recibirá notificaciones en su despacho o en la Calle 5 No. 61-89 Local 8 de la ciudad de Cali. E mail: [adriana\\_cardosodavila@hotmail.com](mailto:adriana_cardosodavila@hotmail.com) o al teléfono 3166905529.

El Llamado en garantía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA S.A., en la Calle 100 No. 9A-45 piso 12 de la ciudad de Bogotá, Dirección de notificación electrónica: [notificaciones@solidaria.com.co](mailto:notificaciones@solidaria.com.co) sin embargo como ya se encuentra vinculada al proceso, bastara con notificar por estado al apoderado de la compañía aseguradora, de conformidad con la normatividad legal aplicable.

Calle 9 No. 4-65 Oficina 204 Cali 3166905529  
e-mail: [adriana\\_cardosodavila@hotmail.com](mailto:adriana_cardosodavila@hotmail.com)



ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA

ABOGADA

Asesora Jurídica

---

Del señor Juez,

**ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA**

**c. c. 66.834.931 de Cali**

**t. p. 84.379 del C. S. de la J.**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Certificado Generado con el Pin No: 2303222454833074**

Generado el 23 de junio de 2022 a las 07:21:00

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

**EL SECRETARIO GENERAL**

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el artículo 11.2.1.4.59 numeral 10 del decreto 2555 de 2010, modificado por el artículo 3 del decreto 1848 de 2016.

**CERTIFICA**

**RAZÓN SOCIAL: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA**

**NIT: 860524654-6**

**NATURALEZA JURÍDICA:** Entidad aseguradora dedicada a los seguros generales, organizada como cooperativa, que tiene el carácter de institución auxiliar del cooperativismo, sin ánimo de lucro. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

**CONSTITUCIÓN Y REFORMAS:** Escritura Pública No 0064 del 18 de enero de 1985 de la Notaría 32 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Bajo la denominación de SEGUROS UCONAL LIMITADA.

Escritura Pública No 3098 del 31 de julio de 1989 de la Notaría 18 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió su razón social por la de SEGUROS UCONAL SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA.

Escritura Pública No 4201 del 17 de octubre de 1991 de la Notaría 20 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió su razón social por la de SEGUROS UCONAL.

Escritura Pública No 3296 del 16 de noviembre de 1993 de la Notaría 41 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió su razón social por la de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA "SOLIDARIA"

Escritura Pública No 1628 del 19 de julio de 2004 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). El domicilio principal será en Bogotá D.C.

Escritura Pública No 420 del 09 de marzo de 2007 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Es una institución auxiliar del cooperativismo, de carácter Nacional, especializada en la actividad aseguradora, sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, de número de ley, con patrimonio variable e ilimitado.

Escritura Pública No 01779 del 24 de julio de 2013 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). El domicilio principal de SOLIDARIA es Bogotá Distrito Capital, República de Colombia, sin perjuicio de constituir Agencias y Sucursales dentro y fuera del país. Es una entidad aseguradora dedicada a los seguros generales, organizada como cooperativa, que tiene el carácter de institución auxiliar del cooperativismo, sin ánimo de lucro, modifica su razón social de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA por la de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA

**AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:** Resolución S.B. 2402 del 30 de junio de 1988

**REPRESENTACIÓN LEGAL:** El Presidente Ejecutivo de SOLIDARIA, además de Representante Legal, será el Primer Ejecutivo de SOLIDARIA, será el ejecutor de las decisiones de la Junta de Directores y de la Asamblea General, y el responsable directo de la administración de SOLIDARIA. **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO.** Las funciones y responsabilidades del Presidente Ejecutivo de SOLIDARIA son las siguientes: 1. Planear, organizar, ejecutar y controlar la administración de SOLIDARIA, así como supervisar y controlar todos los negocios y operaciones de SOLIDARIA. 2. Ejercer la Representación Legal de

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 2303222454833074

Generado el 23 de junio de 2022 a las 07:21:00

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

SOLIDARIA y, en tal virtud, celebrar los contratos y operaciones propias de su objeto social y que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de SOLIDARIA, y llevar la Representación Judicial y Extrajudicial de SOLIDARIA. 3. Autorizar el desembolso de fondos de acuerdo con los negocios propios de la actividad aseguradora. 4. Ordenar los gastos y desembolsos de recursos, de acuerdo con el presupuesto aprobado por la Junta de Directores. 5. Nombrar la planta de empleados que conforma la estructura administrativa de SOLIDARIA aprobada por la Junta de Directores, asignar las funciones y fijar las remuneraciones, de acuerdo con la escala salarial. 6. Representación judicial y extrajudicial a SOLIDARIA, y conferir poderes especiales y generales. 7. Informar mensualmente a la Junta de Directores sobre el estado de SOLIDARIA. 8. Solicitar la convocatoria extraordinaria de la Junta de Directores, cuando lo juzgue necesario. 9. Solicitar la convocatoria extraordinaria de la Junta de Directores, cuando lo juzgue necesario; 10. Preparar el informe de gestión para presentar a la Asamblea General. 11. Autorizar la apertura de las cuentas bancarias y de ahorros. 12. Todas las demás que se deriven de su cargo o que le sean asignadas por la Junta de Directores. REPRESENTACIÓN LEGAL. En adición al Presidente Ejecutivo, la Representación Legal de SOLIDARIA estará en cabeza de los demás Representantes Legales que designe la Junta de Directores. PARÁGRAFO. Para asuntos Judiciales la Representación Legal de SOLIDARIA la tendrán además de los Representantes Legales, los Representantes Legales Judiciales que designe la Junta de Directores, quienes tendrán funciones de representar a la compañía en actuaciones judiciales y audiencias que se surtan ante las autoridades jurisdiccionales, administrativas, policivas y entidades del sector central descentralizadas del estaso. Especialmente, los representantes legales judiciales tendrán las facultades de constituir apoderados judiciales, representar a la compañía en las audiencias de conciliaciones judiciales, extrajudiciales, para absolver interrogatorios de parte, para recibir notificaciones, tanto ante autoridades jurisdiccionales, administrativas, policiva, así como entidades del sector central y descentralizadas. (Escritura Pública 01779 del 24 de julio de 2013 Notaria 43 de Bogotá D.C.). REGLAMENTO DE ATRIBUCIONES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES: ARTICULO SEGUNDO: los demás Representantes Legales, de que trata el artículo primero de éste reglamento, cuentan con las mismas atribuciones de representación legal que las del Presidente Ejecutivo de Aseguradora Solidaria de Colombia, Entidad Cooperativa; señaladas en el artículo 66 del actual cuerpo estatutario. (oficio 2013092496 del 21 de octubre de 2013 )

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Francisco Andrés Rojas Aguirre Fecha de inicio del cargo: 01/11/2021	CC - 79152694	Presidente Ejecutivo
José Iván Bonilla Pérez Fecha de inicio del cargo: 17/01/2019	CC - 79520827	Representante Legal
Nancy Leandra Velasquez Rodriguez Fecha de inicio del cargo: 12/03/2020	CC - 52032034	Representante Legal
Maria Yasmith Hernández Montoya Fecha de inicio del cargo: 28/07/2011	CC - 38264817	Representante Legal Judicial
Juan Pablo Rueda Serrano Fecha de inicio del cargo: 28/07/2011	CC - 79445028	Representante Legal Judicial

**RAMOS:** Resolución S.B. No 5148 del 31 de diciembre de 1991 Automóviles, Corriente débil, Estabilidad y calidad de la vivienda nueva, Incendio, Manejo, Vidrios, Terremoto, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Sustracción y Cooperativo de vida

Resolución S.B. No 1335 del 29 de abril de 1993 Responsabilidad civil

Resolución S.B. No 868 del 09 de mayo de 1994 Cumplimiento

Resolución S.B. No 1893 del 02 de septiembre de 1994 Transporte

Resolución S.B. No 2565 del 23 de noviembre de 1994 Montaje y rotura de maquinaria, Todo riesgo contratista, Accidentes personales

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.  
Conmutador: (571) 5 94 02 00 – 5 94 02 01  
[www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

**Certificado Generado con el Pin No: 2303222454833074**

Generado el 23 de junio de 2022 a las 07:21:00

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

Resolución S.B. No 2127 del 01 de octubre de 1998 Salud

Resolución S.B. No 636 del 13 de junio de 2002 Exequias

Resolución S.B. No 1067 del 19 de septiembre de 2002 Enfermedades de Alto Costo

Resolución S.B. No 1408 del 09 de diciembre de 2002 cancela el ramo de SOAT

Resolución S.B. No 230 del 11 de marzo de 2003 Vida grupo

Resolución S.F.C. No 0794 del 11 de mayo de 2006 Lucro Cesante

Resolución S.F.C. No 1458 del 30 de agosto de 2011 se revoca la autorización concedida a Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. Entidad Cooperativa para operar el ramo de seguros de Enfermedades de alto costo

Resolución S.F.C. No 1194 del 28 de junio de 2013 Seguros de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito SOAT

Resolución S.F.C. No 1577 del 23 de agosto de 2013 autorizado para operar el ramo de Seguro de Desempleo

Resolución S.F.C. No 0842 del 03 de julio de 2019 autoriza para operar el ramo de seguro de Navegación y Casco

**JOSUÉ OSWALDO BERNAL CAVIEDES  
SECRETARIO GENERAL**

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."



191



NIT: 860.524.654-6



ACCIDENTES PERSONALES A PASAJEROS (RESP. CIVIL CONTRACTUAL)

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS  
4300288166

PÓLIZA No: 430 -4 - 994000000014 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI SUR	COD. AGE: 430	RAMO: 4	PAP:
DIA MES AÑO 23 12 2009	VIGENCIA DE LA PÓLIZA DIA MES AÑO HORAS 07 12 2009 23:59	DIA MES AÑO HORAS 07 12 2010 23:59	DIA MES AÑO 29 08 2018
FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA A LAS	FECHA DE IMPRESIÓN
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL	TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION		

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION	VIGENCIA DEL ANEXO DIA MES AÑO HORAS 07 12 2009 23:59	DIA MES AÑO HORAS 07 12 2010 23:59	DIA MES AÑO 29 08 2018
	VIGENCIA DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA A LAS	

DATOS DEL TOMADOR	
NOMBRE: COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE MOTORISTAS Y TRANSPORTADORES COOMOEPAL LT	IDENTIFICACIÓN: NIT 890.303.081-7
DIRECCIÓN: CARRERA 44 9C 18	CIUDAD: CALI, VALLE
	TÉLEFONO: (2) 5511111

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO	
ASEGURADO: VER CERTIFICADOS DE SEGURO	IDENTIFICACIÓN:
DIRECCIÓN:	CIUDAD:
BENEFICIARIO: LOS DE LEY	TÉLEFONO:

DESCRIPCION		AMPAROS		SUMA ASEGURADA	
UNICO		COBERTURA COMPLETA - MUERTE		60 SMMLV	
		INCAPACIDAD TEMPORAL		60 SMMLV	
		INCAPACIDAD PERMANENTE		60 SMMLV	
		GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS		60 SMMLV	
ITEM	SERVICIO	PLACA	No PASAJEROS	PRIMA	CONDUCTOR
302	PUBLICO URBANO	YAP873	19	234,000.00	NO
UNICO		COBERTURA COMPLETA - MUERTE		65 SMMLV	
		INCAPACIDAD TEMPORAL		65 SMMLV	
		INCAPACIDAD PERMANENTE		65 SMMLV	
		GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS		65 SMMLV	
ITEM	SERVICIO	PLACA	No PASAJEROS	PRIMA	CONDUCTOR
UNICO				90 SMMLV	
				90 SMMLV	
				90 SMMLV	
				90 SMMLV	
				90 SMMLV	
ITEM	SERVICIO	PLACA	No PASAJEROS	PRIMA	CONDUCTOR

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ 14,715,693,500.00	VALOR PRIMA: \$ *****121,048,554	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0	TOTAL A PAGAR: \$ *****121,048,554
--	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------	---------------------------------------

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE FINESA SEGUROS & CIA. LTDA.	CLAVE 4852	%PART 100.00	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR	(415)7701861000019(8020)00000000007000430028816	FIRMA TOMADOR
------------------	---	---------------

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá	CLIENTE	NMUNOZ 0
--	---------	----------

CADB20780D07F47F59

la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

26

192

## PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES A PASAJEROS EN VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO O PARTICULAR

### CONDICIONES GENERALES



#### CLÁUSULA PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES:

##### 1. AMPAROS:

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, QUIEN EN ADELANTE SE LLAMARÁ LA COMPAÑÍA, SE OBLIGA A INDEMNIZAR LOS DAÑOS CORPORALES CAUSADOS DIRECTA Y EXCLUSIVAMENTE POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO OCURRIDOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, A PERSONAS OCUPANTES DEL VEHÍCULO DE SERVICIO PÚBLICO O PARTICULAR EN SU CALIDAD DE USUARIO, EXCEPTO AL CONDUCTOR, A MENOS DE QUE ÉSTE PAGUE LA PRIMA ADICIONAL, CON SUJECCIÓN A LOS SIGUIENTES AMPAROS Y CUANTÍAS PARA CADA UNA DE LAS VÍCTIMAS DE UN ACCIDENTE, ESPECIFICADOS EN LA MISMA:

A.) GASTOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS, POR LESIONES CORPORALES EN EXCESO DE LA COBERTURA DE GASTOS MÉDICOS DEL SOAT, DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA SUBCUENTA EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y DE LA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD (E.P.S.) EN DONDE SE ENCUENTRE AFILIADA LA VÍCTIMA DEL ACCIDENTE. LA INDEMNIZACIÓN SIEMPRE SE HARÁ DE ACUERDO CON LAS TARIFAS Y CONCEPTOS SOAT VIGENTES A LA FECHA DEL ACCIDENTE.

B.) INCAPACIDAD PERMANENTE, SEGÚN LA CALIFICACIÓN EFECTUADA SIGUIENDO LO ESTABLECIDO EN LA LEY 100 DE 1.993 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.

C.) INCAPACIDAD TEMPORAL; BAJO ESTE AMPARO SE INDEMNIZARÁ ÚNICAMENTE A AQUELLOS PASAJEROS QUE DEMUESTREN MEDIANTE CUALQUIER PRUEBA LEGAL, QUE ESTÉN DEVENGANDO EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO UN INGRESO POR RENTA DE TRABAJO. SE PAGARÁ UNA RENTA DIARIA EQUIVALENTE AL INGRESO DIARIO DEVENGADO PERO EN EXCESO DE LO INDEMNIZADO POR LA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD (E.P.S.) O POR LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES (A.R.P.) A LA QUE ESTE AFILIADO, HASTA POR DOCE (12) MESES SIN EXCEDER DEL LÍMITE ESTABLECIDO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

D.) MUERTE DE LA VÍCTIMA COMO CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE, SIEMPRE Y CUANDO OCURRA DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE ÉSTE.

E.) GASTOS FUNERARIOS, SIEMPRE Y CUANDO LA MUERTE OCURRA COMO CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DEL MISMO, EN EXCESO DE LA COBERTURA DE GASTOS FUNERARIOS DEL SOAT.

##### 2. EXCLUSIONES:

LA PRESENTE PÓLIZA NO AMPARARÁ:

2.1 LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO OCURRIDOS FUERA DEL RADIO DE ACCIÓN TAL COMO SE DEFINE EN LA CLÁUSULA TERCERA INUMERAL 4.9, CON EXCEPCIÓN DE LOS VIAJES OCASIONALES QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE SOPORTADOS CON LA PLANILLA ÚNICA DE VIAJE OCASIONAL.

2.2 LOS GASTOS MÉDICOS DE LAS PERSONAS OCUPANTES, (O CONDUCTOR SI SE ENCUENTRA ASEGURADO), QUE AL MOMENTO DEL ACCIDENTE NO SE ENCUENTRE VIGENTE SU AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y/O RIESGOS PROFESIONALES O QUE SE HAYAN AFILIADO SIN CUMPLIR LAS NORMAS LEGALES ESTABLECIDAS PARA DICHA AFILIACIÓN (ARTÍCULO 20, DECRETO 806 DE 1.998).

2.3 LA INCAPACIDAD TEMPORAL DE LAS PERSONAS OCUPANTES, (O CONDUCTOR SI SE ENCUENTRA ASEGURADO), QUE AL MOMENTO DEL ACCIDENTE NO SE ENCUENTRE VIGENTE SU AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y/O RIESGOS PROFESIONALES O QUE SE HAYAN AFILIADO SIN CUMPLIR LAS NORMAS LEGALES ESTABLECIDAS PARA DICHA AFILIACIÓN (ARTÍCULO 20, DECRETO 806 DE 1.998).

#### CLÁUSULA SEGUNDA: LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD:

LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA SE LIMITARÁ AL VALOR ESTABLECIDO PARA CADA AMPARO CON UN NÚMERO MÁXIMO DE VÍCTIMAS QUE NO PODRÁ SER SUPERIOR, EN NINGÚN CASO, AL INDICADO EN LA TARJETA DE OPERACIÓN COMO "CAPACIDAD PASAJEROS"

#### CLÁUSULA TERCERA: DEFINICIONES:

##### ACCIDENTE DE TRÁNSITO:

Accidente de tránsito, es el suceso ocasionado o en el que haya intervenido un vehículo automotor, en una vía pública o privada con acceso público, destinada al tránsito de vehículos, personas y/o animales y que como consecuencia de su circulación o tránsito, o que por violación de un precepto legal o reglamentario de tránsito, causa daño en la integridad física de las personas.

##### TRANSPORTE PÚBLICO:

De conformidad con el artículo 6° de la LEY 105 de 1993, el transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestación económica.

##### SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA:

Es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad,

a través de un contrato celebrado entre la empresa y cada una de las personas que utilizan el vehículo de servicio público a ésta vinculado, para su traslado en una ruta legalmente autorizada.

##### SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR EN VEHÍCULOS TAXI:

Es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, en forma individual, sin sujeción a rutas ni horarios, donde el usuario fija el lugar o sitio de destino. El recorrido será establecido libremente por las partes contratantes.

##### SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL:

Es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, a un grupo específico de personas ya sean estudiantes, asalariados, turistas (prestadores de servicios turísticos) o particulares, que requieren de un servicio expreso y que para todo evento se hará con base en un contrato escrito celebrado entre la empresa de transporte y ese grupo específico de usuarios.

27

#### PLANILLA ÚNICA DE VIAJE OCASIONAL:

Es el documento que debe portar todo conductor de vehículo de servicio público para la realización de un viaje ocasional

#### VIAJE OCASIONAL PARA SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA:

Es aquel que excepcionalmente autoriza el Ministerio de Transporte a empresas de transporte habilitadas en esta modalidad para transportar, dentro o fuera de sus rutas autorizadas, un grupo homogéneo de pasajeros, por el precio que libremente determinen, sin sujeción a tiempo o al cumplimiento de horarios específicos.

#### VIAJE OCASIONAL PARA SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS TAXI:

Es aquel que excepcionalmente autoriza el Ministerio de Transporte a un vehículo taxi, para prestar el servicio público de transporte individual por fuera del radio de acción autorizado.

#### RADIO DE ACCIÓN:

Es el ámbito de operación autorizado a una empresa dentro del perímetro de los servicios autorizados.

#### ruta:

Es el trayecto comprendido entre un origen y un destino, unidos entre sí por una vía, con recorrido determinado.

#### CLÁUSULA CUARTA: PAGO DE INDEMNIZACIONES:

La Compañía pagará la indemnización a que da lugar la presente póliza, dentro del término legal, contado a partir del día siguiente a la fecha en la cual la víctima o cualquier otro beneficiario que tenga derecho a recibir la indemnización, formulen la reclamación correspondiente acompañada de las pruebas del accidente, de los daños corporales, sus consecuencias económicas y de la calidad de beneficiarios.

Se consideran pruebas suficientes, sin perjuicios de que la víctima o cualquier otro beneficiario que tenga derecho a recibir la indemnización pueda aducir otros medios de prueba, además de la certificación sobre la ocurrencia del accidente expedida por las autoridades competentes, entre otras, las siguientes:

- Certificaciones de las atenciones por lesiones corporales expedida por la entidad médica asistencial u hospitalaria debidamente autorizada para funcionar.
- La calificación de la incapacidad permanente, efectuada de acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
- Las facturas originales debidamente canceladas por concepto del pago de los servicios funerarios, las cuales deben cumplir con los requisitos mínimos exigidos por la DIAN
- Las certificaciones laborales sobre ingreso por rentas de trabajo.
- Certificación de la Entidad Promotora de Salud (E.P.S) o de la Administradora de Riesgos Profesionales (A.R.P) sobre los días de Incapacidad Temporal Laboral.

La muerte y la calidad de beneficiarios se probarán con copias autenticadas de las actas de registro civil o con las pruebas supletorias del Estado Civil previstas en la ley.

**NOTA: EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN LIBERA AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE TODA RESPONSABILIDAD ANTE EL OCUPANTE ACCIDENTADO, O SUS BENEFICIARIOS, HASTA POR LA SUMA INDEMNIZADA POR LA COMPAÑÍA.**

#### CLÁUSULA QUINTA: BENEFICIARIOS EN CASO DE MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS:

En caso de muerte de un ocupante, o del conductor si está asegurado, como consecuencia de un accidente cubierto por esta póliza, serán beneficiarios de las indemnizaciones por muerte las personas señaladas en el artículo 1142 del Código de Comercio. La indemnización por gastos funerarios se pagará a quien demuestre haber realizado las correspondientes erogaciones en exceso del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

#### CLÁUSULA SEXTA: ACCIDENTES ENTRE VEHÍCULOS DE PASAJEROS:

En los casos de accidentes de tránsito en los cuales, además del vehículo descrito en esta póliza, hayan participado otro u otros vehículos, la compañía solo correrá con el importe de las indemnizaciones correspondientes a los ocupantes del vehículo excepto al conductor, a menos de que éste pague la prima adicional, en exceso del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), en los amparos a que haya lugar.

#### CLÁUSULA SEPTIMA: EXCEPCIONES:

A las víctimas de los accidentes del vehículo y a los beneficiarios no les serán oponibles excepciones derivadas de vicios o defectos relativos a la celebración del contrato o al incumplimiento de obligaciones propias del tomador.

Sin embargo, les serán oponibles todas las demás excepciones, tales como: pago por compensación, prescripción y transacción. Con todo, La Compañía podrá repetir contra el tomador por cualquier suma que haya pagado como indemnización por concepto de este seguro, cuando el Tomador o quien está conduciendo el vehículo en el momento del accidente con su autorización, haya actuado con dolo, culpa grave o dentro de aquellas circunstancias en que el seguro adolece en vicios o defectos coetáneos a su contratación o al incumplimiento de las obligaciones imputables al Tomador.

La subrogación de la Compañía en los derechos y acciones contra responsables de los accidentes, diferentes al Tomador del seguro, en lo que a los amparos que tienen carácter indemnizatorio se refiere (gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, incapacidad temporal y gastos funerarios) se regirá por las normas generales del código del comercio.

#### CLÁUSULA OCTAVA: TRANSFERENCIA DEL VEHÍCULO:

La transferencia de la propiedad del vehículo descrito en la póliza o de su interés asegurable, no producirá la terminación automática del presente contrato de seguro.

#### CLÁUSULA NOVENA: CLÁUSULAS NO IMPRESAS:

Además de considerarse incorporadas las disposiciones legales concordantes, cualquier condición que las partes contratantes agreguen, ya sea en el cuerpo de la presente póliza, por carta o anexo, tendrán la misma validez de las condiciones impresas.

#### CLÁUSULA DECIMA: ADHESIÓN:

Si durante la vigencia de este seguro se presentan modificaciones a las condiciones generales de la póliza, legalmente informadas a la Superintendencia Bancaria, que representen un beneficio en favor del asegurado, se considerarán automáticamente incorporadas a la póliza, siempre que el cambio no implique un aumento de la prima originalmente pactada.

#### CLÁUSULA UNDECIMA: REVOCACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO:

El contrato de seguro podrá ser revocado unilateralmente por los contratantes: Por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, mediante noticia escrita al asegurado, enviada a su última dirección conocida, con no menos de diez (10) días de antelación, contados a partir de la fecha del envío; por el ASEGURADO, en cualquier momento, mediante aviso escrito a la COMPAÑÍA.

En el primer caso, la revocación dará derecho al asegurado a recuperar la prima no devengada, o sea, la que corresponde al lapso comprendido entre la fecha en que comienza a surtir efectos la revocación y la del vencimiento del contrato. La devolución se computará de igual modo, si la revocación resulta del mutuo acuerdo de las partes.

En el segundo caso, el importe de la prima devengada y el de la devolución se calcularán tomando en cuenta la tarifa de seguros a corto plazo.

#### CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: NOTIFICACIONES:

Cualquier declaración que deban hacerse las partes para la ejecución de las estipulaciones anteriores, serán dirigidas a la última dirección registrada por las partes en el Certificado del Seguro.

#### CLÁUSULA DECIMA TERCERA: DISPOSICIONES LEGALES:

La presente póliza es ley para las partes y se regirá por las leyes de la República de Colombia.

#### CLÁUSULA DECIMA CUARTA: DOMICILIO:

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para efectos relacionados con el presente seguro, se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá, D.C. en la República de Colombia.

**POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES A PASAJEROS EN VEHICULOS  
DE SERVICIO PUBLICO O PARTICULAR**

**ANEXO DEL CONDUCTOR**

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ACUERDA CON EL TOMADOR, INCORPORAR EL PRESENTE ANEXO, A LA PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES A PASAJEROS EN VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO O PARTICULAR ARRIBA ESPECIFICADA, EL CUAL QUEDA SUJETO A TODOS LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y EXCEPCIONES SEÑALADAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DE DICHA PÓLIZA, JUNTO CON LAS QUE SE ESTIPULAN A CONTINUACIÓN.

**CLAUSULA PRIMERA.-AMPARO**

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, PREVIO EL PAGO DE LA RESPECTIVA PRIMA ADICIONAL, SE AMPARA AL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, CONTRA LOS RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO OCURRIDOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.

**CLAUSULA SEGUNDA.-EXCLUSIONES**

PARA EFECTOS DE ESTE ANEXO, NO ESTARÁN CUBIERTA LA MUERTE O LAS LESIONES QUE SUFRA EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO OBJETO DEL SEGURO, COMO CONSECUENCIA DE:

- A) ENFERMEDADES FÍSICAS O PSÍQUICAS
- B) DEFECTOS FÍSICOS O MENTALES
- C) ENCONTRARSE BAJO LA INFLUENCIA DE DROGAS TÓXICAS, HEROICAS O ALUCINÓGENAS
- D) ENCONTRARSE BAJO LA INFLUENCIA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES
- E) VIOLACIÓN DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO

**CONDICION TERCERA. LIMITES DE EDAD.**

EL PRESENTE ANEXO CUBRE ÚNICAMENTE A LOS CONDUCTORES QUE SE ENCUENTREN CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 18 Y LOS 65 AÑOS.

**NOTA:** EN TODO LO NO PREVISTO EN LAS CONDICIONES DE ESTE ANEXO, SE APLICARÁN LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA.

Expedido en \_\_\_\_\_, República de Colombia a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ASEGURADORA SOLIDARIA  
DE COLOMBIA

\_\_\_\_\_  
EL TOMADOR

127  
104

**POLIZA SEGURO DE AUTOMÓVILES**

**NÚMERO ELECTRÓNICO  
PARA PAGOS**  
**4300288448**

**PÓLIZA No: 430 -40 - 994000002495 ANEXO:0**

AGENCIA EXPEDIDORA: **CALI SUR**

COD. AGE: **430**

RAMO: **40**

PAP: **379 - CALI SUR**

DIA MES AÑO  
**24 12 2009**

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

DIA MES AÑO HORAS  
**07 12 2009 23:59**

VIGENCIA DESDE

A LAS

DIA MES AÑO HORAS  
**07 12 2010 23:59**

VIGENCIA HASTA

A LAS

DÍAS

DIA MES AÑO  
**21 06 2017**

FECHA DE IMPRESIÓN

FECHA DE EXPEDICIÓN

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL**

TIPO DE IMPRESIÓN: **REIMPRESION**

TIPO DE MOVIMIENTO **EXPEDICION**

VIGENCIA DEL ANEXO

DIA MES AÑO HORAS  
**07 12 2009 23:59**

VIGENCIA DESDE

A LAS

DIA MES AÑO HORAS DÍAS  
**07 12 2010 23:59 365**

VIGENCIA HASTA

A LAS

**DATOS DEL TOMADOR**

NOMBRE:

**COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE MOTORISTAS Y TRANSPORTADORES COOMOEPAL LT**

IDENTIFICACIÓN: NIT

**890.303.081-7**

DIRECCIÓN:

**CARRERA 44 9C 18**

CIUDAD: **CALI, VALLE**

TELÉFONO: **(2) 5511111**

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO:

**PROPIETARIOS DE LOS VEHICULOS**

IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

TELÉFONO:

BENEFICIARIO: **VER CERTIFICADOS**

IDENTIFICACIÓN:

**DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS**

Ver relación ...

VALOR ASEGURADO TOTAL: <b>\$ 43,826,580,000.00</b>	VALOR PRIMA: <b>\$ *****243,600,246</b>	GASTOS EXPEDICION: <b>\$ *****3,000.00</b>	IVA: <b>\$ ***38,976,519</b>	TOTAL A PAGAR: <b>\$ *****282,579,765</b>
---	--	---	---------------------------------	--

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE <b>FINESA SEGUROS &amp; CIA. LTDA.</b>	CLAVE <b>4852</b>	%PART <b>100.00</b>	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

**FIRMA ASEGURADOR**

(415)7701861000019(8020)00000000007000430028844

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CADB20780D07F47A5B

CLIENTE

NMUNOZ 0

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2508 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

**POLIZA SEGURO DE AUTOMOVILES**

122  
105

**NÚMERO ELECTRÓNICO  
PARA PAGOS**  
**4300288448**

**TRASLADO**

**PÓLIZA No: 430 -40 -994000002495**

**ANEXO:0**

AGENCIA EXP.: **CALI SUR**

COD. AGE.: **430** RAMO: **40**

PAP: **379 - CALI SUR**

DIA	MES	AÑO
24	12	2009

DIA	MES	AÑO	HORAS
07	12	2009	23:59

DIA	MES	AÑO	HORAS	DÍAS
07	12	2010	23:59	365

DIA	MES	AÑO
21	06	2017

FECHA DE EXPEDICIÓN

VIGENCIA DESDE

A LAS

VIGENCIA HASTA

A LAS

DÍAS

FECHA DE IMPRESIÓN

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL**

TIPO DE IMPRESIÓN:

TIPO DE MOVIMIENTO: **EXPEDICION**

VIGENCIA DEL ANEXO

DIA	MES	AÑO	HORAS
07	12	2009	23:59

DIA	MES	AÑO	HORAS	DÍAS
07	12	2010	23:59	365

**DATOS DEL TOMADOR**

NOMBRE: **COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE MOTORISTAS Y TRANSPORTADORES COOMOEPAL LT** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.303.081-7**

DIRECCIÓN: **CARRERA 44 9C 18**

CIUDAD: **CALI, VALLE**

TELÉFONO: **(2) 5511111**

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: **COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE MOTORISTAS Y TRANSPORTADORES COOMOEPAL LT** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.303.081-7**

DIRECCIÓN: **CARRERA 44 9C 18**

CIUDAD: **CALI, VALLE**

TELÉFONO: **(2) 5511111**

BENEFICIARIO: **COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE MOTORISTAS Y TRANSPORTADORES COOMOEPAL LT** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.303.081-7**

**DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS**

ITEM: **295** PLACA: **YAP873** MARCA Y TIPO: **CHEVROLET NKR [1] 2.8L MT 2800CC TD** CLASE: **CAMIONETA**

CODIGO: **01606089**

CARROCERIA: **CERRADO**

COLOR: **BLANCO**

MODELO: **1998**

SERVICIO: **PUBLICO**

MOTOR: **BD30023037Y**

CHASIS: **NA**

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD: **NO**

BENEFICIARIOS: **COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE MOTORISTAS Y TRANSPORTADORES COOMOEPAL LT**

AMPAROS

SUMA ASEGURADA

% VR. DEDUCIBLE  
PERDIDA

MINIMO (SMMLV)

RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	89,442,000.00	10.00	2.00
DAÑOS BIENES DE TERCEROS	60.00 SMMLV	10.00	2.00
MUERTE O LESION UNA PERSONA	60.00 SMMLV		
MUERTE O LESION DOS O MAS PERSONAS	120.00 SMMLV		
ASIST. JURIDICA	SI		
PROTECCION PATRIMONIAL	SI		

VALOR ASEGURADO TOTAL:  
\$ **\*\*\*129,342,000.00**

VALOR PRIMA:  
\$ **\*\*\*\*\*486,000.00**

GASTOS EXPEDICION:

IVA:  
\$ **\*\*\*77,760.00**

TOTAL A PAGAR:  
\$ **\*\*\*\*\*563,760.00**

**INTERMEDIARIO**

NOMBRE  
**FINESA SEGUROS & CIA. LTDA.**

CLAVE  
**4852**

%PART  
**100.00**

NOMBRE COMPAÑIA

**COASEGURO CEDIDO**

%PART

VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y PARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.



**FIRMA ASEGURADOR**

(415)7701861000019(8020)00000000007000430028844

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE



GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6801, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento.



123/102

en el país

- Armenia: Av. Bolívar 5 Norte 85  
Tels.: (056) 746 997778
- S.E.A.S. Barrancabermeja:  
Calle 50 No. 10A - 54 L. 105  
Tel.: (056) 620 1695
- Barranquilla: Cra. 47 No. 74 - 60  
Tel.: (055) 368 0280 - 368 9461  
S.E.A.S. El Prado  
Calle 75 No. 58 - 30 Loc. 3  
Tels.: (055) 368 00 00 / 40 00
- Bogotá  
Casa Solidaria: Calle 94 No. 14 - 48  
PBX: 616 2836  
Centro: Cra. 21 No. 395-73  
Tel.: (051) 320 3588  
Centro Internacional:  
Carrera 7 No. 33 - 22  
Tels.: (051) 285 0775 - 285 0669  
Norte: Av. Cra. 15 No. 106 - 98  
Tel.: (051) 620 6388 - 620 6399  
Sur: Calle 40 sur No. 78A - 18  
Tel.: (051) 452 8616/17  
Restrepo: Carrera 18 No. 16 - 04 Sur  
Tels.: 361 1315 / 17  
Fontibón: Calle 17 No. 100 - 12  
Tels.: (051) 421 4775 / 4314  
Suba: Av. Suba Transv. 60 No. 115 - 58  
Tels.: (051) 813 4868/8794 Torre A.L. 107  
S.E.A.S. Centro de Atención de Seguros C.A.S.  
Calle 63B No. 19A - 29  
Tel.: (051) 540 0971 - 540 0878  
S.E.A.S. Centro Operativo de Seguros C.O.S.  
Calle 100 No. 23 - 44 Ofic. 104  
Tel.: (051) 636 2924 - 636 5051  
S.E.A.S. Servicios Integrales de Seguros S.I.S.  
Carrera 13 No. 28 - 01 Loc. 29  
Centro Comercial Palma Real  
Tel.: (051) 287 7037 / 14  
S.E.A.S. Ades: Cra. 14 No. 58 - 73 Oficina 502  
Tels.: (051) 636 1070  
S.E.A.S. Calle 72:  
Cra. 11 No. 71 - 41 Piso 3º - Oficina 305  
Tels.: (051) 310 7148 - 310 7209  
S.E.A.S. El Lago  
Cra. 16A No. 79 - 95  
Tel.: (051) 805 0503 - 805 1159
- Bucaramanga: Cra. 36 No. 44 - 35  
Tel.: (057) 657 0990 - 657 0884  
S.E.A.S. Bucaramanga Centro:  
Carrera 23 No. 37 - 81  
Edificio Bolívar Plaza  
Tel.: (057) 634 4546 - 634 1625  
S.E.A.S. Seguros Olma Ltda.  
Calle 50 No. 28 - 68  
Tel.: (057) 657 3823
- S.E.A.S. Buenaventura: Calle 2 No. 5 - 26  
Tel.: (052) 241 6348 - 242 3690
- Buga: Carrera 13 No. 4 - 71 / 75  
Tel.: (052) 228 1516 - 228 1549
- Cali  
Norte: Calle 21 Norte No. 4N - 30  
Tel.: (052) 660 7801  
Sur: Calle 9 No. 40 - 60  
Barrio Los Cambulos  
Tels.: (052) 554 6531/32/36/39/40  
Rocasevelt: Av. Rocasevelt (Calle 6) No. 27 - 18  
Tel.: (052) 558 0128

- S.E.A.S. Versalles: Av. SAN No. 23AN - 51  
(052) 660 7612 - 668 7470  
S.E.A.S. Oroño Restrepo Y Cia. Ltda.  
Calle 9 No. 40 - 60 Barrio Los Cambulos  
Tels.: (052) 554 6531/32/36/39/40
  - Cartagena: Plaza Aduana  
Calle Amargura 4 - 17 Tel. (055) 664 6460
  - Cúcuta: Calle 13 No. 1E - 23 Caobos  
Tel.: (057) 571 7562 - 583 1823  
S.E.A.S. Carnalías: Calle 15A No. 1E - 67  
Tel.: (057) 594 0851 / 52
  - Girardot: Av. 30 No. 7B - 11  
Barrio Blanco Tel.: (051) 830 79 09 / 20
  - Ibagué: Cra. 4D No. 35 - 39  
Tels.: (058) 266 58 01 - 264 3910
  - Manizales: Cra. 23 No. 42 - 60  
Tel.: (056) 880 9494 / 10
  - Medellín  
Laureles: Transv. 39B No. 73A - 09/11  
Tel.: (054) 414 4846  
Poblado: Cra. 43A No. 23 - 61 Local 137  
Tel.: (054) 381 2233 - 232 1174  
Sabaneta: Calle 75 Sur No. 43A - 202  
Tel.: (054) 448 8789  
Centro Comercial Aves María  
S.E.A.S. Medellín  
Cra. 43A No. 23 - 61 Local 137  
Tel.: (054) 381 2233 - 311 708 9290
  - Montería: Calle 24 No. 2 - 61  
Local 5 Edificio 3 Av.  
Tel.: (054) 782 1502 - 782 0644
  - Neiva: Carrera 7 No. 16 - 32  
Tel.: (058) 875 3200
  - Pasto: Carrera 25 No. 20 - 65  
Edificio Calle Real Loc. 209  
Tel.: 722 8100 - 722 5869
  - Pereira: Carrera 8 No. 21 - 32  
Tel.: (056) 325 4555
  - S.E.A.S. Popayán: Calle 1 No. 7 - 14  
Tel.: (052) 820 0427 - 820 0585
  - S.E.A.S. San Gil: Cra. 9 No. 11 - 89 Of. 204  
Tel.: (057) 724 2428 - 724 4900
  - Rionegro: Calle 42 No. 56 - 39  
Bloque 1 Of. 209 - 210 Plaza Comercial Savanna  
Tel.: (054) 561 8999
  - Tunja: Cra. 10 No. 19 - 57 Piso 2  
Tel.: (058) 743 9264/66
  - Valledupar: Calle 16 No. 12 - 67 Loc. 101 - 102  
Tel.: (055) 580 8989
  - Villavicencio: Calle 35 No. 36 - 55  
Tel.: (058) 672 0606 - 668 9732
  - Yopal: Carrera 22 No. 9 - 75  
Tels.: (058) 634 7898 - 634 7874
- CENTROS DE ATENCIÓN VEHICULOS
- Bogotá:  
Av. Cra. 70 No. 88 - 36  
Tel.: (051) 613 4840 - 613 5474
  - Cali:  
Av. 6N No. 47N - 58 Barrio La Flora  
Tel.: (052) 485 2502
  - Medellín:  
Cra. 43A No. 31 - 75  
Tels.: (054) 232 7575

**Línea Solidaria**

24 horas al día, 365 días al año

Gratis desde cualquier ciudad del país

En Bogotá

www.solidaria.com.co

**GRATIS**  
**#789**  
Desde cualquier celular



**Aseguradora Solidaria**  
de Colombia

19052009-1502-40-AU-37

**Clausulado**



**Responsabilidad Civil**

**Extracontractual**

Transportadores de Servicio Público Pasajeros

**Conducir  
protegido hace el  
camino más seguro**



**Aseguradora Solidaria**  
de Colombia

7

## NOTAS

### PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL TRANSPORTADORES DE SERVICIO PÚBLICO PASAJEROS

#### CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

##### 1. AMPAROS

##### 1.1 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES ESTABLECIDAS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, AL PAGO DE LA PRIMA CONVENIDA, ASÍ COMO EN CONSIDERACIÓN A LAS DECLARACIONES QUE EL TOMADOR HA HECHO EN LA SOLICITUD Y A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS DEMÁS DOCUMENTOS SUMINISTRADOS POR EL MISMO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA COBERTURA RESPECTIVA, LOS CUALES SE INCORPORAN A ESTE CONTRATO PARA TODOS LOS EFECTOS, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA., ENTIDAD COOPERATIVA INDEMNIZARÁ AL TERCERO DAMNIFICADO HASTA POR EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO QUE SEA PACTADO EN ESTA PÓLIZA, EL DAÑO EMERGENTE CAUSADO POR EL ASEGURADO POR LOS CUALES ÉSTE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, COMO CONSECUENCIA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA POR LOS DAÑOS QUE ÉSTE HAYA OCASIONADO A PERSONAS O COSAS, EMANADOS DE UN SOLO ACONTECIMIENTO OCASIONADO POR EL VEHÍCULO DESCRITO EN ESTA PÓLIZA, CUANDO SEA CONDUCTO POR EL ASEGURADO O CUALQUIER OTRA PERSONA AUTORIZADA POR EL MISMO ASEGURADO, Y ÉSTE O EL CONDUCTOR SEAN CIVILMENTE RESPONSABLES DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS.

HABRÁ LUGAR A REEMBOLSAR AL ASEGURADO LOS VALORES PAGADOS POR EL MISMO CONCEPTO, CON PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y ESCRITA DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA.

##### 1.2 AMPARO DE ASISTENCIA JURÍDICA

CON EL PRESENTE AMPARO ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA., ENTIDAD COOPERATIVA ASIGNARÁ CON CARGO A LA PÓLIZA UNA FIRMA DE ABOGADOS PARA QUE ASISTA, ASESORE Y REPRESENTE LOS INTERESES DEL CONDUCTOR AUTORIZADO DEL VEHÍCULO ASEGURADO, DEL

125/108

ASEGURADO Y/O TOMADOR DE LA POLIZA EN LOS SIGUIENTES PROCESOS:

1.2.1 HASTA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA EN PROCESOS PENALES POR LESIONES PERSONALES CULPOSAS Y HOMICIDIO CULPOSO DERIVADOS EN ACCIDENTES DE TRANSITO Y AMPARADOS POR LA PRESENTE POLIZA.

1.2.2 HASTA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EN LOS PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL QUE SE ADELANTEN EN CONTRA DEL CONDUCTOR, ASEGURADO Y TOMADOR POR DAÑOS A LAS PERSONAS Y A LAS COSAS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO Y AMPARADOS POR LA PRESENTE POLIZA.

1.2.3 HASTA FALLO DE PRIMERA INSTANCIA EN LOS PROCESOS CONTRAVENCIONALES ADMINISTRATIVOS DE TRANSITO DERIVADOS UNICAMENTE EXCLUSIVAMENTE POR ACCIDENTES DE TRANSITO Y AMPARADOS POR LA PRESENTE POLIZA ADELANTADOS POR LAS RESPECTIVAS INSPECCIONES MUNICIPALES DE TRANSITO Y EN LOS LUGARES QUE OPERA DICHO PROCEDIMIENTO.

SE ENTIENDEN EXCLUIDOS DE ESTE AMPARO LOS PROCESOS CONTRAVENCIONALES DE TRANSITO DERIVADOS POR COMPARENDOS, OBJECIONES A COMPARENDOS, MULTAS Y RETENCIONES DE LICENCIA POR EMBRIAGUEZ O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

1.2.4 ES OBLIGACION DEL ASEGURADO Y/O CONDUCTOR AUTORIZADO OTORGAR EL RESPECTIVO PODER A FAVOR DEL ABOGADO NOMBRADO Y ASIGNADO POR ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, SO PENA DE CONSTITUIRSE EN CAUSAL DE NO PAGO DE CUALQUIER INDEMNIZACION DERIVADA EN EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.

### 1.3 AMPARO DE PROTECCION PATRIMONIAL

TENIENDO EN CUENTA LAS COBERTURAS CONTRATADAS EN LA POLIZA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA INDEMNIZARA AL ASEGURADO O BENEFICIARIO INDICADO EN LA CARATULA DE LA MISMA, CON SUJECION A LOS DEDUCIBLES ESTIPULADOS EN EL CUADRO DE AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.

### 10. JURISDICCION TERRITORIAL

Los amparos otorgados mediante la presente póliza operan mientras el vehículo se encuentre dentro del territorio de la República de Colombia.

### 11. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales para los efectos relacionados con el presente contrato, se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá D.C., en la República de Colombia.

### 12. DISPOSICIONES LEGALES

La presente póliza es ley para las partes. Para las materias y puntos no previstos en este contrato se aplicaran las normas relativas al contrato de seguro.

## 6. DEDUCIBLE

El deducible determinado en la carátula de esta póliza, es el monto o porcentaje del daño indemnizable que invariablemente se deduce de éste y por lo tanto siempre queda a cargo del asegurado.

## 7. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

La enajenación del vehículo automotor producirá automáticamente la extinción del contrato de seguro, a menos que el automotor continúe afiliado a la empresa transportadora tomadora del seguro, caso en el cual el contrato continuará vigente en tanto subsista interés asegurable en cabeza del tomador.

## 8. REVOCACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

El contrato de seguro podrá ser revocado unilateralmente por los contratantes.

Por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, mediante noticia escrita al asegurado, enviada a su última dirección conocida, con no menos de diez (10) días de antelación, contados a partir de la fecha del envío; por el asegurado, en cualquier momento, mediante aviso escrito a ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

En el primer caso, la revocación da derecho al asegurado a recuperar la prima no devengada, o sea, la que corresponde al lapso comprendido entre la fecha en que comienza a surtir efectos la revocación y la del vencimiento del contrato.

La devolución se computará de igual modo, si la revocación resulta del mutuo acuerdo de las partes.

En el segundo caso, el importe de la prima devengada y el de la devolución se calcularán tomando en cuenta la tarifa de seguros a corto plazo.

## 9. NOTIFICACIONES

Cualquier aclaración o notificación que deban hacerse el Asegurado y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA para la ejecución de las estipulaciones anteriores, deberá consignarse por escrito (siempre y cuando así lo exija la Ley).

Será prueba suficiente de la notificación la constancia de su envío del aviso por escrito por correo recomendado o certificado a la última dirección registrada por cada uno.

EL DAÑO EMERGENTE QUE SUFRAN LOS TERCEROS CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO DE ACUERDO CON LA LEY Y LOS DAÑOS QUE OCASIONE CUANDO EL ASEGURADO O EL CONDUCTOR, QUE PARA EFECTOS DE ESTE ANEXO DEBE ESTAR AUTORIZADO PARA SU CONDUCCIÓN, INCURRA EN LAS CAUSALES INDICADAS EN EL NUMERAL 2.1.12 DE LA CONDICIÓN SEGUNDA, EXCLUSIONES DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA.

## 2. EXCLUSIONES

### 2.1 EXCLUSIONES APLICABLES A TODOS LOS AMPAROS DE ESTA PÓLIZA

EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NO CUBRE LOS PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR:

- 2.1.1 MUERTE O LESIONES A PASAJEROS, O A PERSONAS OCUPANTES DEL VEHÍCULO ASEGURADO.
- 2.1.2 MUERTE O LESIONES AL ASEGURADO, AL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO ASEGURADO, A LOS SOCIOS DEL ASEGURADO O A LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO.
- 2.1.3 MUERTE, LESIONES O DAÑOS CAUSADOS POR LA CARGA TRANSPORTADA CUANDO EL VEHÍCULO ASEGURADO NO SE ENCUENTRE EN MOVIMIENTO, COMO TAMPOCO DAÑOS O PERDIDA DE LA CARGA O EQUIPAJE.
- 2.1.4 MUERTE O LESIONES A PASAJEROS O A PERSONAS QUE EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE SE ENCUENTREN REPARANDO O ATENDIENDO EL MANTENIMIENTO O SERVICIO DEL VEHÍCULO ASEGURADO.
- 2.1.5 MUERTE O LESIONES CAUSADAS EN EL ACCIDENTE AL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE, O A LOS PARIENTES HASTA EL SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD DEL ASEGURADO, CONDUCTOR DEL VEHÍCULO ASEGURADO, COMO DE LOS SOCIOS DEL ASEGURADO, O DE LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO.

2.1.6 DAÑOS CAUSADOS CON EL VEHÍCULO ASEGURADO A COSAS SEAN O NO TRANSPORTADAS EN ÉL, O A BIENES SOBRE LOS CUALES EL ASEGURADO, EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO ASEGURADO, LOS SOCIOS DEL ASEGURADO O LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO O SU CÓNYUGE, COMPAÑERO (A) PERMANENTE O SUS PARIENTES HASTA EL SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD O PRIMERO CIVIL, TENGAN LA PROPIEDAD, POSESIÓN, TENENCIA O CONTROL.

2.1.7 MUERTE, LESIONES O DAÑOS QUE EL ASEGURADO O EL CONDUCTOR AUTORIZADO CAUSE CON EL VEHÍCULO VOLUNTARIA O INTENCIONALMENTE A TERCEROS O A COSAS AJENAS AL VEHÍCULO MISMO (DOLO).

2.1.8 DAÑOS A PUENTES, CARRETERAS, CAMINOS, VIADUCTOS, SEÑALES DE TRÁNSITO, SEMAFOROS O BALANZAS DE PESAR VEHÍCULOS, CAUSADOS POR VIBRACIONES, PESO, ALTURA O ANCHO DEL VEHÍCULO.

2.1.9 LA RESPONSABILIDAD QUE SE LE GENERE AL ASEGURADO, AL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO ASEGURADO, A LOS SOCIOS DEL ASEGURADO O A LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO POR MUERTE, LESIONES O DAÑOS CUANDO EL VEHÍCULO SEA CONDUCIDO SIN AUTORIZACION DEL ASEGURADO.

2.1.10 LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ACEPTADA MEDIANTE TRANSACCIÓN O CONCILIACIÓN HECHA POR EL ASEGURADO, O POR EL CONDUCTOR AUTORIZADO DEL VEHÍCULO ASEGURADO SIN PREVIO CONSENTIMIENTO ESCRITO DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA., ENTIDAD COOPERATIVA.

2.1.11 LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL RESULTANTE DE UN FALLO EN UN PROCESO EN QUE EL ASEGURADO NO HAYA PARTICIPADO O HABIENDO PARTICIPADO NO HAYA LLAMADO A LA GARANTÍA A LA ASEGURADORA.

2.1.12 CUANDO EL CONDUCTOR VIOLE LAS NORMAS DE TRÁNSITO DESATIEDE LAS SEÑALES REGLAMENTARIAS DE TRÁNSITO, NO ACATE

reclamación, con la documentación que acredite la ocurrencia del siniestro, la cuantía de la pérdida y la calidad de beneficiario.

5.2. ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA., ENTIDAD COOPERATIVA indemnizará a la víctima, quien se constituye en beneficiaria de la indemnización, los perjuicios materiales que le hayan sido causados por el asegurado cuando este sea civilmente responsable de acuerdo con la ley y se acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía.

Para tal efecto debe presentarse la prueba de la calidad del beneficiario, del perjuicio sufrido y de su cuantía.

5.3. Salvo autorización previa de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA., ENTIDAD COOPERATIVA, otorgada por escrito, el asegurado no estará autorizado para:

5.3.1. Reconocer su propia responsabilidad. Esta prohibición no comprende la declaración del asegurado sobre la materialidad de los hechos constitutivos del accidente.

5.3.2. Hacer pagos, celebrar acuerdos, transacciones o conciliaciones con la víctima del daño o sus causahabientes.

La prohibición de efectuar pagos no se aplicará cuando el asegurado sea condenado por la autoridad competente a indemnizar a la víctima, mediante decisión ejecutoriada, ni tratándose de pagos por atención médica y hospitalaria de la víctima siempre y cuando esté cubierto por el seguro de daños corporales causados a las personas en accidente de tránsito.

5.4. En desarrollo del artículo 1044 del Código de Comercio, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA., ENTIDAD COOPERATIVA podrá oponer a la víctima beneficiaria las excepciones que hubiere podido alegar contra el tomador o asegurado.

5.5. ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA., ENTIDAD COOPERATIVA no indemnizará a la víctima los perjuicios causados por el asegurado cuando hubiesen sido previamente indemnizados por cualquier otro mecanismo.

**COSTAS DEL PROCESO:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA., ENTIDAD COOPERATIVA responderá, por las costas del proceso civil, que el tercero damnificado o sus causahabientes promuevan en su contra o la del asegurado con las salvedades siguientes:  
Si la responsabilidad proviene de dolo, está expresamente excluida de este contrato.

Si el asegurado afronta el proceso contra orden expresa de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA., ENTIDAD COOPERATIVA.

Si la condena por los perjuicios ocasionados a la víctima excede el límite o límites asegurados, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA., ENTIDAD COOPERATIVA solo responderá por las costas del proceso en proporción a la cuota que le corresponda en la indemnización.

#### **4. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO**

4.1. Al ocurrir cualquier accidente, el asegurado deberá dar aviso a ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA., ENTIDAD COOPERATIVA, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a partir de la fecha en que haya conocido o debido conocer la ocurrencia del hecho.

4.2. Así mismo deberá dar aviso a ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA., ENTIDAD COOPERATIVA de toda comunicación, reclamación, notificación, citación, demanda, procedimiento o diligencia que reciba, judicial o extrajudicialmente, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se tenga noticia relacionada con cualquier acontecimiento que pueda dar lugar a una reclamación de acuerdo con la presente póliza.

4.3. Adoptar todas las medidas que favorezcan su defensa frente a cualquier reclamación, debiendo mostrarse tan diligente como si no existiera seguro.

Si el asegurado incumple cualquiera de estas obligaciones, ASEGURADORA SOLIDARIA LTDA., ENTIDAD COOPERATIVA podrá deducir de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

#### **5. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN**

5.1. ASEGURADORA SOLIDARIA LTDA., ENTIDAD COOPERATIVA efectuará el pago de la indemnización dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha en que el asegurado o beneficiario haya formalizado la

LA SEÑAL ROJA DE LOS SEMÁFOROS, CONDUZCA A UNA VELOCIDAD QUE EXCEDA LA PERMITIDA, CAREZCA DE LICENCIA VIGENTE PARA CONDUCIR VEHÍCULOS DE LA CLASE Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA PRESENTE PÓLIZA, CONDUZCA VEHÍCULOS NO PERMITIDOS POR LA CATEGORÍA DE LA MISMA, INCURRA EN CULPA GRAVE O CUANDO SE ENCUENTRE BAJO EL INFLUJO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES, DROGAS TÓXICAS, HERÓICAS O ALUCINÓGENAS.

2.1.13 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS MORALES SUFRIDOS POR EL TERCERO DAMNIFICADO, SALVO ACUERDO EXPRESO ENTRE LAS PARTES.

2.1.14 MUERTE, LESIONES O DAÑOS CAUSADOS POR TRANSPORTAR EN EL VEHÍCULO ASEGURADO MERCANCIAS AZAROSAS, INFLAMABLES O EXPLOSIVAS, SIN LA PREVIA NOTIFICACIÓN Y LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN ESCRITA DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA.

2.1.15 MUERTE, LESIONES O DAÑOS CAUSADOS AL ENCONTRARSE TRANSPORTANDO EN EL VEHÍCULO ASEGURADO, SUSTANCIAS O MERCANCIAS ILÍCITAS.

2.1.16 MUERTE, LESIONES O DAÑOS CAUSADOS CUANDO EL VEHÍCULO ASEGURADO SEA USADO, APREHENDIDO, EMBARGADO, DECOMISADO, O DECRETADA LA EXTINCIÓN DE DOMINIO POR CUALQUIER ACTO DE AUTORIDAD.

2.1.17 MUERTE, LESIONES O DAÑOS CAUSADOS CUANDO EL VEHÍCULO SE HAYA SOBRE CARGADO (SOBRECARGO), O QUE SE EMPLEE PARA USO DISTINTO AL ESTIPULADO EN ESTA PÓLIZA, O QUE SE DESTINE PARA LA ENSEÑANZA DE CONDUCCIÓN, O PARTICIPE EN COMPETENCIAS O ENTRENAMIENTO AUTOMOVILÍSTICO DE CUALQUIER ÍNDOLE O CUANDO REMOLQUE O SEA REMOLCADO POR OTRO VEHÍCULO EN CONDICIONES QUE CONFIGUREN VIOLACIÓN A LOS PRECEPTOS LEGALES O REGLAMENTARIOS DE TRÁNSITO.



2.1.18 OBLIGACIONES DEL ASEGURADO DE CARÁCTER CONTRACTUAL Y LABORAL.

2.1.19 MUERTE, LESIONES O DAÑOS ORIGINADOS POR CONTAMINACIÓN O POR ACCIÓN DIRECTA O INDIRECTA DE FENÓMENOS DE LA NATURALEZA, TALES COMO TERREMOTO, TEMBLOR O ERUPCIÓN VOLCÁNICA.

2.1.20 MUERTE, LESIONES O DAÑOS COMO CONSECUENCIA DE LA INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES LEGALES SOBRE TRANSPORTE, NORMAS TÉCNICAS O DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO O DE LA PRESCRIPCIONES MÉDICAS PARA SU CONDUCTOR.

2.1.21 MUERTE, LESIONES O DAÑOS CAUSADOS POR HUELGAS, AMOTINAMIENTOS, CONMOCIÓN CIVIL, ASONADA, REBELIÓN, SEDICIÓN, LEVANTAMIENTO POPULARES, PAROS, CESE DE ACTIVIDADES, SABOTAJE, ACTOS DE GRUPOS SUBVERSIVOS Y/O TERRORISTAS O DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY.

2.1.22 AQUELLAS OTRAS EXCLUSIONES PARTICULARES QUE EXPRESAMENTE PACTEN EL TOMADOR Y/O ASEGURADO Y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA.

2.1.23 LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL ASEGURADO O CONDUCTOR AUTORIZADO QUE ESTÉN O SEAN CUBIERTOS POR EL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, ARP, EPS, ARS, ENTIDADES DE MEDICINA PREPAGADA, PLANES COMPLEMENTARIOS, FONDOS DE PENSIONES O DE OTRAS ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO LOS COBROS QUE POR SUBROGACIÓN ESTÉ FACULTADA DE MANERA LEGAL O CONVENCIONAL, LAS ENTIDADES ANTES CITADAS, CON OCASIÓN DE LAS PRESTACIONES CANCELADAS EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES LEGALES O CONTRACTUALES.

2.2 EXCLUSIONES APLICABLES AL AMPARO DE ASISTENCIA JURÍDICA.

EL AMPARO DE ASISTENCIA JURÍDICA NO RECONOCERÁ PAGOS O REEMBOLSOS EN LOS SIGUIENTES CASOS:

2.2.1 CUANDO EL PROCESO PENAL NO SE ORIGINE POR LESIONES O MUERTE CULPOSA EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO.

2.2.2 CUANDO EL PROCESO ES AFRONTADO SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA.

### 3. VALOR ASEGURADO

#### 3.1. LÍMITE MÁXIMO DE INDEMNIZACIÓN POR EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.

Los valores asegurados establecidos para la presente póliza serán los indicados en la carátula de la misma, y constituyen el límite máximo de responsabilidad que asume ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA., ENTIDAD COOPERATIVA, por concepto de los daños materiales causados por el asegurado o por las personas expresamente autorizadas por él para conducir el vehículo asegurado descrito en la carátula de esta póliza, cuya causa sea en un mismo siniestro, esto es, un mismo accidente de tránsito. Dicho límite de cobertura se establece por accidente, independiente del número de víctimas.

La cobertura otorgada por esta póliza por muerte o lesiones a las personas, solamente se afectará en exceso de los pagos correspondientes a los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios y a los gastos funerarios otorgados por la póliza del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) del vehículo descrito en la carátula de esta póliza y de la coberturas de Fidusalud, E.P.S. y ARP.

**PARÁGRAFO.** – El valor asegurado, que se indica en la carátula de la póliza, en todo caso, será el límite máximo a cargo de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA en cualquier evento amparado, incluyendo la suma de los perjuicios patrimoniales o materiales, de los cuales sea responsable el asegurado. En consecuencia, en ningún caso o evento derivado de un solo siniestro, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA., ENTIDAD COOPERATIVA pagará una suma superior al valor asegurado indicado en la carátula de la póliza.



Santiago de Cali, marzo 22 de 2022

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA  
NIT: 860524654-6

**CERTIFICA QUE:**

La póliza de automóviles colectiva No. **994000003634** con vigencia desde 07/02/2010 hasta 07/12/2010 a nombre de COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE MOTORISTAS Y TRANSPORTADORES COOMOEPAL LT No. de nit. 890.303.081. Tuvo vigencia en las fechas mencionadas anteriormente.

Amparando el vehículo de placas YAP873

Por lo anterior se firma la siguiente certificación a los 22 días del mes de marzo de 2022.

Atentamente.

*Ivy Carolina f.*

**YVI CAROLINA PEREZ TABORDA**  
Gerente  
Agencia Cali Sur

D.M.G



Señor

**JUZGADO VEINTIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE CALI VALLE**

**E. S. D.**

**Radicación**

**760014003028201800021**

**Proceso**

**VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL**

**Demandante**

**ISABEL PARDO TROCHEZ**

**Demandado**

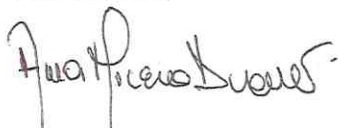
**COOMOEPAL Y OTROS.**

**ANA MILENA DUQUE R.** mayor de edad, vecina de Cali (Valle), identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.467.781, actuando en calidad de representante legal de la **COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTES COOMOEPAL**, NIT 890303081-7, en calidad de demandada dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito me permito manifestar a usted que otorgo poder especial, amplio y suficiente a la abogada **ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA** igualmente mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.834.931 de Cali, abogada en ejercicio, portadora del a tarjeta profesional No. 84.379 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en nuestro nombre y representación realice la defensa técnica y material de mis legítimos derechos e interés, se notifique de la demanda en mi contra, la conteste, presente excepciones previas y de fondo, llame en garantía a la compañía Aseguradora Solidaria de Colombia, o a cualquier otra compañía aseguradora que amparaba el vehículo de placas YAP873 para la fecha de los hechos, denuncie el pleito, demande a los litisconsorte necesarios del ser del caso, asista a las audiencia que programe el despacho, proponga fórmulas de arreglo en la audiencia de conciliación, interponga recursos de ley, solicite la práctica de pruebas, así como también para que realice todas y cada una de las acciones inherente a mi defensa como demandado dentro del referido proceso.

Sírvase señor Juez reconocerle la debida personería jurídica para actuar.

Mi defensora queda facultada para recibir, transigir, conciliar, sustituir, reasumir y desistir al presente poder, y podrá ser ubicada en la calle 9 No. 4-65 oficina 204 de la ciudad de Cali, celular 3166905529 y en el correo electrónico: **adriana\_cardosodavila@hotmail.com**

Cordialmente,



**ANA MILENA DUQUE R**

**C. C. 31.467.781**

**Representante Legal Coomoepal**

Acepto el poder,

**ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA**

**C. C. 66.834.931 de Cali**

**T. P. 84.379 del Consejo Superior de la Judicatura**

03

República de Colombia

389331

**NOTARIA ONCE DE CALI****CERTIFICACION DE FIRMA REGISTRADA**

El suscrito Notario Once del Circulo de Cali  
certifica que ha cotejado la FIRMA anterior con  
la registrada en sus archivos por:

**ANA MILENA DUQUE RICAURTE****C.C 31467.781**

registro con el que corresponde.

(Art. 73 D.L. 960/70)

Fecha : 22/06/2022 Hora : 11:20

  
**JUAN CARLOS GOMEZ JIMENEZ**  
**NOTARIO ENCARGADO**





Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia

LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y  
AUXILIARES DE LA JUSTICIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CERTIFICA

Certificado de Vigencia N.: 328475

Que de conformidad con el Decreto 196 de 1971 y el numeral 20 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura regular, organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y expedir la correspondiente Tarjeta Profesional, previa verificación de los requisitos señalados por la Ley.

En atención a las citadas disposiciones legales y una vez revisado los registros que contienen nuestra base de datos se constató que el (la) señor(a) **ADRIANA PATRICIA CARDOSO DAVILA**, identificado(a) con la **Cédula de ciudadanía No. 66834931.**, registra la siguiente información.

VIGENCIA

CALIDAD	NÚMERO TARJETA	FECHA EXPEDICIÓN	ESTADO
Abogado	84379	13/02/1997	Vigente
Observaciones: -			

Se expide la presente certificación, a los **23** días del mes de **junio** de **2022**.

**MARTHA ESPERANZA CUEVAS MELÉNDEZ**  
Directora

Notas 1- Si el número de cédula, los nombres y/o apellidos presentan error, favor dirigirse a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.  
2- El documento se puede verificar en la página de la Rama Judicial [www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co) a través del número de certificado y fecha expedición.  
3- Esta certificación informa el estado de vigencia de la Tarjeta Profesional, Licencia Temporal, Juez de Paz y de Reconsideración